

Evelyne Huber Stephens

El gobierno militar peruano, la movilización obrera y la fuerza política de la izquierda¹

El gobierno militar peruano de 1968-80 desafió las expectativas y las categorizaciones derivadas del trabajo académico sobre el carácter y la ejecutoria de sus homólogos, pasados y presentes, en otros países latinoamericanos.² Una anomalía clave es el hecho de que el movimiento obrero y la izquierda no fueron eclipsados, sino que salieron fortalecidos por el periodo de régimen militar en su capacidad movilizadora y su presencia electoral.³ El propósito de este artículo es explicar el legado del gobierno militar para el movimiento obrero y la izquierda mediante la dilucidación de los procesos que condujeron a su fortalecimiento, poniendo énfasis especial en las políticas del régimen velasquista.

La literatura sobre los militares en la política subraya de manera virtualmente unánime la actitud negativa de los regímenes militares frente a la movilización popular.⁴ Dependiendo del contexto socioeconómico, se espera que los regímenes militares asuman una de dos políticas frente a las fuerzas populares: la prevención o la represión. En el contexto

1 El autor desea agradecer a Peter Evans sus sugerencias, a Cynthia McClintock y a Martin Scurrah su ayuda en la obtención de materiales, y a John D. Stephens y a los anónimos reseñistas de LARR sus comentarios sobre versiones anteriores del trabajo. La investigación de campo original fue llevada a cabo con la ayuda de una donación del Social Science Research Council.

2 Hobsbawm (1971) y Lowenthal (1975) fueron de los primeros autores que señalaron la singularidad y la ambigüedad en el carácter del gobierno. Investigaciones ulteriores, que aprovecharon la mejor comprensión del gobierno de Velasco obtenida durante la segunda fase, han atribuido una buena parte de esta ambigüedad y vacilación a la presencia de diferentes tendencias políticas entre los oficiales militares que participaban en el gobierno. Para enfoques particularmente esclarecedores, véanse Cleaves y Scurrah (1980), McClintock (de próxima aparición) y Pease García (1977).

3 La mayor fuerza del movimiento obrero y la izquierda se hace claramente visible en las cifras sobre sindicalización, militancia huelgaria y apoyo electoral. La única forma de refutar este argumento consiste en sostener que el APRA representaba a la izquierda antes de 1968 y que sólo han cambiado los marbetes partidarios. Yo discrepo enérgicamente de tal idea. El APRA y la izquierda marxista han venido compitiendo entre sí desde los años treinta. En contraste con el APRA la izquierda marxista nunca logró hacerse de una base de masas; a mediados de la década del sesenta, todavía no era capaz de atraer más de unos cuantos centenares de personas a sus mítines. El APRA llegó a ser un partido con base de masas, pero hacia los años sesenta se había movido claramente hacia la derecha.

4 Nordlinger (1977) hace una buena revisión panorámica de la literatura y recalca este punto una y otra vez.

latinoamericano, la primera política ha asumido a menudo la forma de lo que se ha llamado *corporativismo incluyente*, y la segunda *corporativismo excluyente* (Stepan 1978).⁵ El Perú bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado pareció encajar en el primer tipo. La movilización popular se dio a un nivel bajo-a-intermedio, y la "revolución desde arriba" del gobierno militar fue vista como una maniobra defensiva encaminada a eliminar las causas estructurales de una insurgencia popular potencial mediante la incorporación de fuerzas populares en organizaciones auspiciadas y controladas por el Estado, al mismo tiempo que se ofrecían algunos beneficios a través de reformas redistributivas. En consecuencia, la categorización dominante del régimen fue corporativista (Chaplin 1976; Coder 1975; Palmer 1973; Stepan 1978), y la expectativa fue que las fuerzas populares quedarían encapsuladas y desmovilizadas, aunque con grados de éxito sectorialmente diferentes según la capacidad anteriormente adquirida para resistir la imposición de controles y restricciones. Sin embargo, las políticas del gobierno velasquista no sólo no debilitaron las organizaciones populares existentes, sino que las fuerzas populares adquirieron además una mayor capacidad de movilización autónoma.

Bajo Francisco Morales Bermúdez (1975-80), el gobierno pareció moverse cada vez más hacia el tipo excluyente de régimen militar. Se ha sostenido que la movilización popular incontrolada de nivel intermedio-a-alto en un contexto de estancamiento económico y políticas de austeridad tiende a ser enfrentada por los regímenes militares de una manera excluyente mediante la disolución de los sindicatos y las organizaciones políticas de izquierda, la persecución de sus dirigentes, la abolición de las libertades civiles, y el cierre en última instancia de todos los canales de actividad política civil organizada. En 1976 el gobierno peruano declaró su primer estado de emergencia y empezó a recurrir a diversas políticas represivas frente a la movilización popular, lo cual sugería una posible afinidad creciente con los regímenes vecinos del Cono Sur (Cotler 1979). Con todo, los militares decidieron efectuar elecciones y devolverle el poder a un gobierno civil en lugar de imponer un régimen burocrático-autoritario y aplastar las organizaciones populares. En esas elecciones, la izquierda emergió como una fuerza más poderosa de lo que había sido antes del golpe de 1968, y el presidente Fernando Belaúnde ha tenido que enfrentarse a

⁵ *Corporativismo* es un término utilizado ampliamente para describir el carácter de los regímenes autoritarios militares o civiles en América Latina (véase, por ejemplo, Pike y Stritch 1974 y Malloy 1977). Stepan (1977) distingue entre la variedad incluyente y la excluyente, esta última semejante al régimen excluyente o burocrático-autoritario de O'Donnell (1973).

organizaciones populares más fuertes, especialmente sindicatos, desde su toma de posesión el 28 de julio de 1980, que las que enfrentó durante su presidencia de 1963-68. Como lo han observado tanto los comentaristas académicos como los actores políticos participantes, el nivel de movilización popular constituye una de las diferencias claves entre el Perú anterior a 1968 y la situación actual (entrevista de Dancourt y Pásara 1980, p. 2).⁶

Este artículo, que centra su atención en las políticas laborales del periodo 1968-80 y sus efectos, intentará explicar por qué el movimiento obrero y la izquierda se fortalecieron bajo el régimen militar. Concluirá con algunos breves comentarios sobre las razones de que no se hiciera ningún intento por instalar un régimen burocrático-autoritario. Las políticas claves que han de examinarse son la introducción de la Comunidad Industrial (CI) y las políticas seguidas frente a los sindicatos. Aunque el proceso de movilización se extendió a los marginados urbanos y al campesinado, el papel de la CI y los sindicatos en la conformación de las interrelaciones entre el gobierno, el movimiento obrero y el sector privado se hallaba en el centro del proceso de movilización creciente. Se argumentará que este proceso de movilización no fue accidental, sino un efecto directo, aunque en su mayor parte no intencional, de las políticas del gobierno militar. Tanto la explicación "corporativista" como la explicación propuesta por algunos críticos izquierdistas son insatisfactorias. La literatura corporativista ve la movilización incrementada como el resultado de un fracaso general del régimen causado por las políticas y las condiciones económicas generales. Los críticos izquierdistas que consideraron el régimen militar como "los agentes leales de la burguesía nacional industrial" ven la movilización incrementada como un resultado de la "expansión del capitalismo con [la cual] el proletariado ha crecido en número y organización" así como en la capacidad para resistir el intensificado ataque del gobierno contra el proletariado y el campesinado frente a la crisis económica (Dore y Weeks 1977, p. 16). Esta explicación es débil porque, si la expansión capitalista efectivamente hace aumentar por lo general el tamaño del proletariado, no conduce automáticamente a un crecimiento organizativo. La explicación del crecimiento organizativo y de la movilización en el caso peruano hay que buscarla, por el contrario, en

6 Otros comentaristas eruditos que han señalado el legado de movilización del régimen son Gorman (1978), Handelman (1980) y, aunque subrayando otros aspectos del legado del gobierno, Stepan (1978) y Lowenthal (1980). Stepan recalca una distribución más equitativa de la tierra y aspectos innovadores en la relación con el capital extranjero (1978), en tanto que Lowenthal subraya como legado importante un cambio en la estructura y distribución del poder de los grupos empresariales, financieros y tecnocráticos tradicionales a los nuevos.

las políticas concretas seguidas por el gobierno y en las reacciones, en buena medida no intencionadas, suscitadas en diversas clases sociales, particularmente los obreros y los capitalistas. Estas reacciones no intencionadas fueron producidas en parte por la inconsistencia de las políticas del gobierno frente al movimiento obrero organizado, resultantes de una falta de unidad ideológica dentro del gobierno. Aunque el elemento corporativista fue importante, las políticas gubernamentales no encajaban en un designio coherente basado en un consenso ideológico, sino que en lugar de ello contenían muchos elementos incongruentes e incluso contradictorios.

La explicación que ofrecemos aquí se apoyará en un análisis estadístico de un conjunto de datos basado en una investigación sobre la Comunidad Industrial llevada a cabo en 1975-76, inmediatamente después de que el presidente Velasco fue remplazado por Morales Bermúdez. El conjunto de datos contiene información sobre el desarrollo de la CI, acerca de los sindicatos y acerca de las pautas huelgarias. Los datos fueron obtenidos de varias oficinas en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Industria y Turismo, y son excepcionales en el sentido de que no constituían información pública sino que fueron obtenidos gracias a la persistencia y la buena suerte.⁷

LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO MILITAR

El "Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas" bajo el presidente Velasco se caracterizó a sí mismo como "humanista-socialista" y profesó un compromiso con cambios estructurales fundamentales en la búsqueda de una vía no comunista y no capitalista de desarrollo económico y justicia social. A despecho de estas proclamaciones y de una apariencia externa de unidad, los miembros del gobierno de Velasco no coincidían de ninguna manera en un proyecto político coherente. El consenso ideológico se limitaba al logro de un orden social y político estable o una "seguridad integral". Los fundamentos de la seguridad integral habían de ser la integración nacional y el desarrollo económico permanente y sostenido por los propios recursos (Mercado Jarrín 1974, pp. 145-63). La integración nacional significaba la eliminación de la lucha de clases mediante la dispersión de las bases de poder económico y político de los pequeños grupos y la superación de la

⁷ Una descripción de los datos y los procedimientos de muestreo aparece en Stephens (1980, pp. 103-7 y Apéndice 1). En este artículo nos referimos a los datos como datos de la CI.

marginalización de las masas. Dentro del gobierno existían, sin embargo, serios desacuerdos y tensiones entre la izquierda y la derecha en lo tocante a la división del poder y los recursos materiales entre el Estado, el capital privado y las clases medias y bajas. Unos cuantos miembros ubicados en la izquierda deseaban orientar una evolución lenta hacia una sociedad socialista, en tanto que muchos miembros derechistas sólo se proponían realizar cambios estructurales para eliminar la explotación excesiva que podía conducir a la insurgencia. Estos desacuerdos dieron lugar a muchas políticas incongruentes, particularmente las relativas al movimiento obrero organizado, que tuvieron muchos resultados imprevistos.

Hacia el término de su segunda fase (que comenzó en 1975 cuando Morales Bermúdez reemplazó a Velasco), la "Revolución Peruana" no había mejorado materialmente la situación de quienes eran oficialmente proclamados como sus beneficiarios principales. Los beneficios que las fuerzas populares —trabajadores urbanos y rurales, marginados urbanos y pequeños campesinos— debían derivar de los profundos cambios estructurales iniciados durante la primera fase (1968 a mediados de 1975) fueron inicialmente limitados o bien desgastados durante la segunda fase. Los dos cambios estructurales más conspicuos que sobrevivieron a la segunda fase, el papel ampliado del Estado en la economía y la reforma agraria, han tenido efectos limitados desde el punto de vista popular. El aparato estatal ampliado ha sido controlado y utilizado de manera creciente por las fuerzas antipopulares. La reforma agraria, aunque significativa porque destruyó una de las principales bases de poder de la vieja oligarquía, aportó beneficios concretos sólo a una pequeña porción de las clases bajas rurales (McClintock 1981) y no llegó a afectar en modo alguno a las masas urbanas. Las reformas estructurales y redistributivas en el sector urbano no sobrevivieron siquiera a la segunda fase. Las Comunidades Industriales fueron "reformadas" hasta hacerlas virtualmente insignificantes, el sector de la propiedad social perdió todo apoyo oficial, y la reducción del gasto público afectó profundamente los niveles de consumo de las masas urbanas. Ello no obstante, la "Revolución" alteró el panorama social y político del país. Su principal legado consiste en el aumento de la capacidad de las fuerzas populares para hacer sentir su presencia como actores sociales y políticos a través de la acción militante directa y de las instituciones representativas, debido a la presencia organizativa más fuerte de los sindicatos urbanos y rurales y las organizaciones de barriada

y la mayor fuerza electoral de los partidos políticos de izquierda.

MANIFESTACIONES DE LA MOVILIZACIÓN POPULAR

La movilización popular se advierte primordialmente en la proliferación de sindicatos durante el periodo velasquista y en el incremento de la actividad huelgaria durante los periodos de Velasco y Morales Bermúdez. El número total de sindicatos casi se duplicó bajo el régimen velasquista, y a despecho de un marcado declive en los reconocimientos de sindicatos bajo Morales Bermúdez, éstos siguieron creciendo (Tabla 1). La actividad huelgaria revela un aumento a partir de los últimos años de la primera presidencia de Belaúnde y los primeros años del régimen velasquista, tanto en frecuencia como en amplitud. Aunque el aumento en frecuencia dio marcha atrás en 1976, cuando el gobierno empezó a poner en práctica diversas medidas represivas en gran escala tales como la ilegalización de huelgas y la imposición de despidos masivos, la mayor amplitud de participación persistió.

Así pues, en tanto que las cifras de la incidencia huelgaria general declinó después de 1975, varias huelgas generales fueron convocadas después de 1977, comenzando con la primera en la historia del Perú en julio de 1977 (Tabla 2). Otras formas de acción directa, tales como las manifestaciones, también aumentaron después de 1968. Además de esto, la participación en diversas formas de acción directa ha cambiado en su composición, incluyendo ahora no sólo al movimiento obrero organizado en las zonas de Lima-Callao y en las regiones mineras, sino también a los marginados urbanos, los obreros en las ciudades de las provincias y algunos sectores de las clases bajas rurales. Las acciones de protesta en forma de huelgas y manifestaciones han sido coordinadas con frecuencia por frentes integrados por sindicatos, organizaciones de barriada y grupos políticos. Han tenido por objeto proteger los niveles de consumo popular en un periodo de inflación desbocada mediante demandas de ajustes salariales, subsidios estatales a los precios de los alimentos y cambios en la política económica del gobierno. Tales acciones amplias coordinadas le han permitido al movimiento obrero peruano compensar en parte una de sus limitaciones cruciales, a saber el tamaño relativamente pequeño de la clase obrera industrial. Al actuar conjuntamente con las organizaciones de barriada, organizaciones cooperativas rurales y

diversos grupos políticos de izquierda, el movimiento obrero organizado ha logrado llegar hasta los desempleados los autoempleados marginalmente y el campesinado, y ampliar así el movimiento popular.

Tabla 1

RECONOCIMIENTO DE LOS NUEVOS SINDICATOS, 1931-1978

Año	Todos los	Industria solamente	Total acumulad
1931-1960	693	234	693
1961	143	45	836
1962	240	99	1076
1963	268	98	1344
1964	307	87	1651
1965	184	69	1835
1966	171	79	2006
1967	146	65	2152
1968	145	49	2297
1969	117	31	2414
1970	198	94	2612
1971	384	212	2996
1972	409	203	3405
1973	357	165	3762
1974	303	133	4065
1975 (ene: ago.)	107	44	4172
1975 (sept.-dic.)	127		4299
1976	126		4425
1977	28		4453
1978	51		4504
Antes de 1968	2152	776	
1968-ago. 1975	2020	931	
1968-1978	2352		

FUENTES: Para las cifras hasta agosto de 1975, Registro de Sindicatos, Ministerio del Trabajo; para las cifras desde agosto de 1975 hasta 1978, Oficina de Planeación Sectoral del Ministerio del Trabajo, y *Realidad 5* (julio de 1979), publicada por SINAMOS, citada por Scurrah y Esteves (de próxima publicación).

Tabla 2

NÚMERO TOTAL DE HUELGAS, HORAS-HOMBRE PERDIDAS Y TRABAJADORES PARTICIPANTES EN EL PERÚ, 1965-1979*

	Huelgas	Horas-hombre perdidas	Trabajadores participantes
1965	397	6 421	135 586
1966	394	11 689	121 232
1967	414	8 373	142 282
1968	364	3 378	107 809
1969	372	3 889	91 531
1970	345	5 782	110 990
1971	377	10 882	161 415
1972	409	6 331	130 643
1973	788	15 688	416 251
1974	570	13 413	362 737
1975	779	20 269	617120
1976	440	6 822	258101
1977	234	6 543	406 461
1978	364	36 145	1 398 387
1979	637	7 900	516 900

FUENTES: *Las huelgas en el Perú 1957-1972* (Lima, Ministerio del Trabajo, 1973); *ILO Yearbook of Labour Statistics* (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1980); cifras de 1979 de William Bollinger, "Peru Today—The Roots of labour Militancy", *NACLA Report on the Americas* 14, 6 (nov.-dic.): 2-35.

* Incluidas las huelgas generales del 19-20 de julio de 1977; 27-28 de febrero de 1978; 22-23 de mayo de 1978; y 9-11 de enero de 1979.

En el nivel electoral, estas organizaciones populares han proporcionado una base para movilizar el apoyo a los partidos políticos de la izquierda.⁸ Una clara manifestación inicial de la presencia política fortalecida de la izquierda se produjo en las elecciones a la Asamblea Constituyente en 1978. Los grupos izquierdistas combinados obtuvieron el 33.8 por ciento del voto popular, en contraste con el 3.5 por ciento obtenido por los partidos de izquierda en las elecciones de 1962 (véase Tabla 3) La cuestión es saber si esta demostración de fuerza en 1978 fue un voto de protesta ocasional después de un programa de austeridad económica de dos años y de fuertes aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad, o si indicó un viraje más duradero hacia la izquierda. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de mayo de 1980, los diversos candidatos de izquierda recibieron el 16.5 y el 20.8 por ciento respectivamente, lo cual confirmó la tesis de que un viraje más duradero había ocurrido. Estos resultados fueron sorprendentemente

⁸ Más adelante se ofrecerá un examen de los diversos partidos, sus orientaciones y sus relaciones entre sí y con las organizaciones populares.

fuertes porque la izquierda no había presentado un bloque de poder alternativo creíble debido a su sectarismo extremo, su faccionalismo y su escasez de recursos. En las elecciones municipales de noviembre de 1980, la izquierda recibió el 27 por ciento de los votos, confirmando una vez más su creciente presencia electoral. La fuerza de la izquierda refleja el proceso más amplio de movilización popular incrementada, con índices más elevados de acción directa resultantes de una mayor penetración organizativa en las clases bajas.

Aunque los partidos políticos de izquierda, las organizaciones de barriada y las organizaciones rurales son participantes importantísimos en el proceso de movilización popular, el papel principal siguen desempeñándolo los sindicatos. Otras organizaciones dependen en diverso grado de los sindicatos porque éstos son los más efectivos en la movilización del apoyo electoral, llevando a cabo acciones de protesta coordinadas y en gran escala y ejerciendo presión sobre las autoridades. Los sindicatos son también más efectivos que otras organizaciones populares porque son las más experimentadas y consolidadas de esas organizaciones y porque disponen del arma potencial más poderosa: la huelga. Así, al tratar de explicar el aumento general en la movilización popular en el Perú, lo más importante es analizar el incremento de la sindicalización y la militancia obrera en el contexto de las políticas seguidas por los gobiernos de Velasco y Morales Bermúdez.

Tabla 3

RESULTADOS ELECTORALES

	Por ciento		votos	
	196	1978	1980	
			Presiden- ciales	Parlame- ntarias
Derecha		23.8	9.6	9.4
UNO	28.	2.1	0.4	0.6
MDP		1.9	0.2	0.4
MDRP		0.5		
Centro-Derecha	31.		45.0	40.9
ÁPR	33.	35.3	27.4	27.6
Centro-Izquierda	2.9	2.4		

Izquierda	0.5			
FLN	2.0			
FOCEP		12.3	1.4	1.7
PCP	1.0	5.91		
		FUI	2.8	3.5
PSR		6.6J		
UDP		4.6	2.3	3.5
FNTC		3.8	1.9	2.2
OPRP			0.4	0.6
UNIR			3.3	4.6
PRT			3.9	3.9
PSP			0.2	0.3
APS		0.6	0.3	0.5
Votos en blanco	1.1			
Total de la izquierda	3.5	33.8	16.5	20.8

FUENTES: Para las cifras de 1962, Neira (1973); para las cifras de 1978, Handelman (1980); para las cifras de 1980, DESCO, *Resumen Semanal* (núm. 77), citado en Woy-Hazleton (1980).

RAZONES PARA EL INCREMENTO DE LA SINDICALIZACIÓN

Como se mencionó en la introducción, las políticas del gobierno velasquista frente a la movilización popular en general y el movimiento obrero en particular se caracterizaron por una falta de coherencia. Los funcionarios gubernamentales de alto nivel discrepaban en cuanto a la distribución de los recursos materiales y el poder entre el Estado, el capital y las fuerzas populares. También diferían en cuanto a reprimir, tolerar o incluso propiciar la movilización popular autónoma y en cuanto a promover la movilización estrictamente controlada con fines de incorporación en las organizaciones auspiciadas por el gobierno y, a la larga, de desmovilización.

La política oficial del gobierno frente a la movilización popular fue de estímulo bajo tutela estatal. En julio de 1971 se estableció el SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social), encargado de "organizar a la población nacional para lograr la participación consciente y activa en las tareas que demanda el desarrollo económico y social".⁹ El SINAMOS desplegó actividad organizando cooperativas agrarias, comunidades industriales, organizaciones de autoayuda en las barriadas, nuevos sindicatos y estructuras intermedias destinadas a vincular estas diversas organizaciones de base con el gobierno. Una mayoría dentro del gobierno se oponía claramente a la organización laboral autónoma

⁹ Un análisis de la estructura y el papel formal del SINAMOS en sus años formativos aparece en Palmer (1973).

y promovía políticas encaminadas a reducir la influencia de los sindicatos existentes y la militancia obrera. Pero en tanto que una facción agrupada en torno del ministro de Pesca Tantaleán Vanini estaba dispuesta a recurrir a medios altamente manipulativos y legalmente cuestionables, otras facciones favorecían una aproximación más moderada al objetivo de debilitar el movimiento obrero organizado. Entre los funcionarios públicos de alto nivel agrupados en el área laboral del SINAMOS, una facción favorecía la movilización sin trabas con la esperanza de que este método empujara el gobierno hacia la izquierda.¹⁰

En 1968, el movimiento obrero organizado no constituía una amenaza inmediata a la estabilidad socioeconómica del Perú. Con un índice de sindicalización del 19 por ciento de la fuerza laboral, su fortaleza podía considerarse como intermedia en el contexto latinoamericano.¹¹ Con todo, el movimiento obrero organizado preocupaba al gobierno militar en dos aspectos. Primero, en algunos sectores, la fuerza obrera era considerablemente superior a 10 que la cifra media podría implicar porque la sindicalización estaba concentrada en dos sectores cruciales de exportación —la minería y la producción azucarera— y en la construcción, así como en algunos sectores de cuello blanco como la banca. Segundo, el movimiento obrero peruano, al igual que sus homólogos en otros países latinoamericanos, había sido sumamente politizado desde sus comienzos. Desde los años cuarenta hasta mediados de los sesenta, la fuerza dominante fue la Confederación de Trabajadores Peruanos (CTP), controlada por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Hasta 1968, el APRA fue el único partido político

10 El SINAMOS dio lugar a una intensa controversia debido al papel parcial que desempeñó en la auténtica movilización, y en 1974 su director, el general Leónidas Rodríguez, fue remplazado y muchos de sus funcionarios destituidos. Este aspecto siempre ha sido pasado por alto por los críticos que calificaron al SINAMOS como un aparato de control exclusivamente corporativista. El esfuerzo organizativo numéricamente más venturoso tuvo lugar en el sector agrario, con la creación de la Confederación Nacional Agraria (CNA). Ésta se convirtió en un duro crítico de las políticas económicas de la segunda fase, sin embargo, y llegó a ser un participante de importancia en las acciones de protesta militantes. En el sector industrial, la organización de nivel superior de las Comunidades Industriales, la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), pronto se desarrolló como un grupo de presión que pro-movió la radicalización de la legislación relativa a las CI, favoreciendo el control obrero y la propiedad social. Para la opinión de un participante sobre el papel movilizador del SINAMOS, véase Béjar (1976); para una descripción de su papel en el sector agrario, véase McClintock (1981) y Cleaves y Scurrah (1980); para el sector industrial, véase Alberti et al. (1977) y Stephens (1980).

11 Los datos del *Statistical Abstract of Latin America* para 1968 muestran que los índices de sindicalización para el Perú son aproximadamente similares a los de Colombia, Chile, Bolivia y el Uruguay, es decir, mucho más bajos que los de la Argentina, Cuba y Venezuela, pero claramente superiores a los del resto de los países latinoamericanos.

peruano con una base de masas. Fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en su exilio mexicano en 1924, el APRA adoptó un programa radical en su primer congreso nacional en 1931. Durante este primer periodo, el APRA se vio frecuentemente envuelto en confrontaciones con los militares. En particular, la matanza de oficiales militares durante un levantamiento en Trujillo en 1932 tuvo como consecuencia una permanente hostilidad de los militares contra el APRA. En las décadas de los cuarenta y los cincuenta, el APRA dominó el emergente movimiento obrero a través de la CTP, pero en 1956, el APRA empezó a entenderse con los partidos de derecha y a abandonar la defensa de los intereses populares en aras de su participación en el poder. Esa política determinó que el APRA perdiera legitimidad como defensor de los intereses de los obreros y le abrió el camino a la creación y el crecimiento de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por los comunistas. Ello no obstante, debido a la tradicional enemistad de los militares hacia el APRA, el continuo debilitamiento de la influencia del APRA en el movimiento obrero se convirtió en un particular motivo de preocupación para el gobierno militar.¹²

La reacción inicial del gobierno frente a estas dos preocupaciones consistió en ofrecer incentivos a los trabajadores en sectores bien organizados para llevarlos a colaborar con los patronos y el gobierno, y en reconocer oficialmente tanto a la CGTP comunista como a la diminuta Central Nacional de Trabajadores (CNT), de inspiración demócrata-cristiana, en 1971 como contrapesos a la CTP. Cuando estas políticas no lograron reducir la influencia de los sindicatos existentes y la militancia obrera, el gobierno auspició una nueva central sindical, la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), para competir con las organizaciones obreras autónomas y debilitarlas. La CTRP tampoco logró alcanzar los objetivos del gobierno. La CGTP y los sindicatos ubicados a su izquierda siguieron creciendo, y la incidencia de huelgas empezó a elevarse en 1973. En lugar de resolver los conflictos existentes, algunas de las políticas gubernamentales de incentivos crearon nuevos conflictos, y en lugar de debilitar la organización obrera autónoma y su militancia, el SINAMOS y la CTRP contribuyeron a su crecimiento.

La política clave de incentivos fue la creación de la Comunidad Industrial (CI),

¹² Para las fuentes y para un examen de la historia del APRA y de las relaciones entre los militares y el APRA, véase el ensayo reseña de North (1975); véase también Klarén (1973). Para una historia del movimiento obrero peruano, véase Sulmont (1975, 1977).

anunciada en julio de 1970. La CI tenía por objeto reconciliar los intereses del trabajo y el capital para participar en las utilidades, la propiedad y la administración de sus empresas. Toda empresa individual con seis empleados cuando menos o un ingreso anual de más de un millón de soles (250 000 dólares en aquel momento) estaba obligada a dar a sus empleados el 25 por ciento de sus utilidades anuales netas antes del pago de impuestos. El reparto tenía dos formas: un 10 por ciento a ser distribuido en efectivo entre los empleados individuales, y un 15 por ciento a ser entregado a la CI (es decir, a la colectividad de todos los empleados de la empresa) en forma de acciones de nueva emisión o compradas a los accionistas existentes.

Además, la CI debía estar representada en la junta directiva de la empresa, inicialmente a través de un representante y más adelante en proporción a su participación en la propiedad de la empresa. La propiedad de la CI había de alcanzar a la larga el 50 por ciento, momento a partir del cual los representantes del trabajo y del capital privado dirigirían conjuntamente la empresa como socios iguales. La expectativa oficialmente expresada era la de que los trabajadores empezarían a identificarse como copropietarios de la empresa y en consecuencia se abstendrían de la acción militante, lo cual haría superflua la presencia de los sindicatos y conduciría a su "extinción". En 1971 el concepto de la CI fue introducido en los sectores de la minería, la pesca y las telecomunicaciones, bajo el nombre genérico de Comunidad Laboral (CL).

A fin de propiciar la colaboración entre el gobierno y los sindicatos, el ministro del Trabajo Salas Orosco siguió una política de puertas abiertas acompañada de convenios salariales favorables. Con todo, pronto se hizo obvio que este método no aseguraría el cumplimiento incondicional, por parte de los trabajadores, de los deseos gubernamentales de moderación en la militancia y que las CL no debilitaban en modo alguno a los sindicatos. En consecuencia, se hicieron esfuerzos por fortalecer a la CTRP mediante la concesión de condiciones favorables a los sindicatos afiliados a ésta. Mediante el control de los dirigentes de la CTRP, el gobierno esperaba debilitar el prestigio de las otras centrales sindicales y la lealtad de los trabajadores a las mismas, que eran la CGTP de filiación comunista, la CTP controlada por el APRA, la CNT demócrata-cristiana y los sindicatos independientes.

Para explicar por qué estas políticas, lejos de lograr los objetivos del gobierno,

contribuyeron a incrementar la sindicalización y la militancia obrera, es conveniente empezar por las razones que determinaban el incremento en la sindicalización, que fue una de las causas principales del aumento de la militancia. En tanto que el número total de sindicatos casi se duplicó entre 1968 y agosto de 1975, el número de sindicatos en el sector industrial-manufacturero superó la duplicación en el mismo periodo. Un examen más cuidadoso del sector industrial-manufacturero revela que una gran proporción de empresas medianas y pequeñas fueron sindicalizadas durante este periodo. Como lo indica la Tabla 4, que se basa en una muestra representativa de empresas en el sector industrial-manufacturero, un nuevo sindicato se formó en más de la mitad de las empresas que empleaban de cincuenta a quinientos trabajadores. Las empresas con menos de cien empleados tendían particularmente a ser sindicalizadas por primera vez. En las empresas mayores y anteriormente sindicalizadas, muchos de los sindicatos eran de cuello blanco o bien sindicatos en otros centros de producción de la misma empresa (la legislación peruana restringe la sindicalización al nivel de establecimiento más bien que al nivel de empresa). Hacia 1976, pues, más de tres cuartas partes de las empresas medianas y grandes (las que tenían más de cincuenta empleados), que en conjunto empleaban el 85 por ciento de la fuerza laboral en el sector industrial, estaban sindicalizadas. Entre 1966 y 1976, el número de sindicatos en el Perú aumentó en más del 120 por ciento, una cifra que se compara favorablemente con el aumento logrado en Chile durante el periodo 1966-73, caracterizado por una movilización sumamente intensa y rápida (Tabla 5).

La tabla 4 muestra la sindicalización antes y después de 1970, cuando se introdujeron las CI y el número de nuevos sindicatos aumentó notablemente.

Tabla 4

SINDICALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE 1970 POR TAMAÑO DE EMPRESA

Número de empleados en empresas	Por ciento de empresas en que se formó un	Por ciento de empresas en categoría	Por ciento de trabajadores empleados por empresas en
---------------------------------	---	-------------------------------------	--

	Antes de	En 1976		
Menos de 20	0	0	28.9	4
20-49	4	25	32.5	11
50-99	23	74	17.0	13
100-499	51	78	19.3	42
500 +	93	98	2.2	30
Todos	17	38	100.0	100.0
N	(338)	(758)	(1993)	(190 762)

FUENTES: Datos de las CI (véase nota 6) ; y Evelyne Huber Stephens, *The Politics of Workers' Participation: The Peruvian Approach in Perspective* (Nueva York, Academic Press, 1980), p. 108.

Estos dos hechos aparecen estrechamente relacionados. Las CI contribuyeron a la formación de nuevos sindicatos tanto al hacer más visible el conflicto de intereses entre el capital y el trabajo cuanto al proporcionar un resguardo organizativo para la formación de sindicatos. En lugar de superar los antagonismos existentes entre trabajadores y patronos, las CI crearon toda una gama de nuevos conflictos.¹³ Los empresarios no sólo se sintieron amenazados por la participación de largo alcance de los trabajadores en la propiedad, sino que incluso a corto plazo consideraron la representación de los trabajadores en las juntas directivas como una infracción intolerable de sus prerrogativas. En consecuencia, recurrieron a una diversidad de maniobras para bloquear el desarrollo de las CI, tanto en lo referente a las alteraciones en la propiedad como a la participación en la dirección de las empresas. Numerosas técnicas fueron utilizadas para minimizar la declaración de utilidades y en consecuencia reducir la cantidad de dinero que se les había de dar a las CI para fines de reinversión en las empresas. En las empresas mayores, las utilidades fueron canalizadas hacia las empresas comerciales y de servicios de los mismos propietarios porque a esos sectores no se les requería establecer una comunidad laboral. En las empresas pequeñas, particularmente las de propiedad familiar, las utilidades fueron reducidas mediante la elevación de los costos de "relaciones públicas" (es decir, agasajos, viajes al extranjero) y de "asesores" (empleados fantasmas o miembros de la familia incluidos en la nómina de pagos). Las reuniones oficiales de las juntas directivas no se efectuaban nunca o se

¹³ Para una opinión similar sobre las CI y un examen de las actitudes y el comportamiento de los empresarios, los sindicatos y las mismas CI, véase Alberti et al. (1977).

convertían en puras formalidades, o a los representantes de la CI no se les proporcionaba la información necesaria antes de las reuniones, etcétera. En muchas empresas pequeñas y no sindicalizadas, se podían utilizar impunemente estas estrategias de evasión debido al bajo nivel de información acerca de la legislación y a la poca capacidad de autodefensa de la fuerza laboral. En las empresas mayores, sin embargo, particularmente allí donde existía un liderato sindical experimentado, los trabajadores advirtieron las maniobras y empezaron a quejarse por la violación de la legislación, pidiéndole apoyo y acción en cumplimiento de la ley al Ministerio de Industria.¹⁴ Aunque a los sindicatos se les prohibía legalmente participar en los asuntos de las CI, ellos desempeñaban un papel principal al proveer el ímpetu necesario para la acción colectiva en defensa de los intereses de los trabajadores como miembros de las CI, así como al aportar experiencia práctica en los tratos con los empresarios y la burocracia estatal.¹⁵ De tal suerte, en lugar de ser relegados a la insignificancia y de extinguirse a la larga, los sindicatos existentes se convirtieron en actores decisivos en la lucha entre las CI y los empresarios en lo tocante a la distribución de las recompensas materiales y el control. Por otra parte, allí donde no existía un sindicato, la percepción por parte de los trabajadores de la necesidad de formar uno a fin de aumentar su capacidad de acción colectiva en la lucha, podía ser agudizada fácilmente por los organizadores y por una demostración de efecto derivada de la experiencia de los trabajadores en otras empresas.

Los organizadores del SINAMOS en su desempeño oficial como promotores de las CI hicieron una aportación indirecta, si bien no siempre intencionada, a la expansión de la sindicalización, contraria al espíritu de la legislación de las CI. Algunos organizadores del SINAMOS estaban empeñados en promover un genuino proceso de movilización y se veían a sí mismos como "guerrilleros burocráticos". Su papel oficial consistía en proporcionar apoyo administrativo en la creación de las CI en colaboración con los organizadores de las

14 Un análisis detallado de los conflictos a nivel de empresa, basado primordialmente en la correspondencia entre las CI, las empresas y el Ministerio de Industria, aparece en Stephens (1980). Aquí el asunto sólo puede mencionarse brevemente a fin de relacionar las CI con el incremento en la sindicalización.

15 La razón de que los dirigentes sindicales tuvieran experiencia en el trato con la burocracia estatal se encuentra en el papel decisivo desempeñado por el Ministerio del Trabajo en todos los aspectos de las relaciones laborales. Todo sindicato tenía que obtener el reconocimiento oficial del Ministerio del Trabajo para poder firmar documentos legalmente válidos, tales como los contratos colectivos. Además, el Ministerio actúa como mediador y árbitro en las negociaciones colectivas, así como en los casos de quejas individuales contra los patronos. En suma, las interacciones entre los patronos y los sindicatos tienen lugar predominantemente a través del Ministerio del Trabajo más bien que sobre una base directa.

CI designados por el Ministerio de Industria y Turismo (MIT) y en informar a los trabajadores acerca de sus derechos y deberes como miembros de las CI, incluida la necesidad de separar estrictamente los asuntos de las CI y los de los sindicatos. Informar a los trabajadores acerca de sus derechos, sin embargo, entrañaba señalar las violaciones de esos derechos por los propietarios de las empresas, y ello agudizaba la percepción, por parte de los trabajadores, del conflicto básico de intereses.

Tabla 5

NÚMERO TOTAL DE SINDICATOS EN CHILE Y EL PERÚ

	N		Indice	
1966	2870	2006	100.0	100.0
1970	4519	2612	157.5	130.2
1972	6001	3405	209.1	169.7
1973		3762		187.5
1974		4065		202.6
1975		4299		214.3
1976		4425		220.6

FUENTES: Chile: Landsberger y McDaniel (1976, p. 518). Perú: Registro de Sindicatos, Ministerio del Trabajo. Cálculos por el autor.

*1966=100.0.

En marzo de 1971 estalló un pequeño escándalo que tuvo como consecuencia el despido de dos funcionarios por haber "predicado la lucha de clases" en un seminario para organizadores de las CI en el Ministerio de Industria. Los organizadores no tenían siquiera que usar el análisis marxista para hacer que los trabajadores reconocieran un conflicto de intereses, sino tan sólo sugerir algunas explicaciones en cuanto a la razón de que ellos no estuvieran recibiendo la parte esperada de las utilidades de una empresa que, antes de la creación de la CI, había obtenido jugosas ganancias. Esto distaba un corto paso del

reconocimiento, por parte de los trabajadores, de que la formación de un sindicato les proporcionaría mayor fuerza para defender sus intereses frente a los patronos. Las CI ayudaron a ampliar la sindicalización al proveer un resguardo protector a los esfuerzos organizativos porque sus asambleas reunían a los trabajadores en situaciones en que la presión social y los sentimientos de solidaridad podían vencer el temor individual y la renuencia a firmar la lista de afiliación sindical necesaria para obtener el reconocimiento oficial.

Un factor adicional que contribuyó al incremento de la sindicalización fue la ley sobre seguridad en el empleo, decretada en noviembre de 1970. Esta ley ejemplifica la política laboral un tanto impulsiva, de acción-reacción, seguida por el gobierno. Fue dictada para detener los despidos masivos a que estaban recurriendo los empresarios adversos a las medidas gubernamentales en sus esfuerzos por crear inquietud social y obligar al gobierno a rescindir las CI. Bajo esta ley (que fue cambiada después de 1975), un trabajador sólo podía ser despedido por faltas de conducta graves después de un periodo de prueba de tres meses. La consecuencia imprevista de la ley fue privar a los patronos peruanos de su táctica usual para impedir la sindicalización: el despido de los organizadores sindicales y sus partidarios y el uso de las correspondientes amenazas. De tal suerte, la legislación resultó claramente contraproducente para los objetivos gubernamentales de debilitar al movimiento obrero organizado.

Otro componente importante de la política laboral del gobierno de Velasco, el patrocinio de la CTRP, fue similarmente contraproducente. A fin de entender por qué se emprendió este proyecto cuando el fracaso de las CI para debilitar los sindicatos existentes se hizo visible, es preciso considerar el mismo en el contexto de la política gubernamental más general de integración nacional y de la preocupación por los vínculos políticos del movimiento obrero organizado. La integración nacional (es decir, la eliminación del conflicto económico y político entre los grupos sociales) requería el debilitamiento de las organizaciones autónomas, particularmente las que tenían una base clasista, y la vinculación directa de esos grupos al Estado a través de organizaciones de nueva creación. Este objetivo exigía el debilitamiento de los sindicatos y el aflojamiento de sus lazos con los partidos políticos. El reconocimiento oficial de la CGTP y la CNT como contrapesos a la CTP, sin embargo, significaba que los funcionarios de esas centrales podían representar a

los sindicatos en las negociaciones con el Ministerio del Trabajo y era por lo tanto una estrategia imperfecta para alcanzar los objetivos del gobierno. Debido a que la CGTP se había desarrollado ya como la central sindical más fuerte, esta estrategia divisionista dejaba sin resolver el problema de cómo enfrentar las presiones del movimiento obrero organizado en general y las presiones políticamente motivadas en particular. El intento de enfrentarlas ofreciendo incentivos para la colaboración, consistentes en la frecuente interacción y negociación directa entre el ministro del Trabajo Sala Orosco e importantes dirigentes sindicales que a menudo tenían como resultado convenios salariales favorables, sí generaba apoyo entre los dirigentes y los sindicatos de la CGTP y la CNT para las políticas laborales y reformistas generales del gobierno, pero de ningún modo garantizaba la aceptación de directivas antihuelgarias ni convertía a los dirigentes sindicales en leales intermediarios entre el gobierno y las bases laborales. De hecho, la CGTP se encontraba con frecuencia en la difícil posición de tratar de moderar la militancia e impedir huelgas prolongadas y costosas sin perder su credibilidad como defensora de los intereses de las bases. Aunque la CGTP llegó correctamente a la conclusión de que no existía ninguna alternativa viable más izquierdista frente al gobierno militar y en consecuencia intentó evitar la provocación innecesaria, la CGTP también estaba convencida de que la fuerza y la presión obreras eran decisivas para fortalecer a las fuerzas más progresistas dentro del gobierno. La moderación en la militancia que se puso en práctica tuvo como resultado que la CGTP fuera acusada de entreguista y colaboracionista; también ocasionó algunas defecciones en la CGTP y un aumento en el número de la militancia de los sindicatos independientes. Entre estos sindicatos independientes eran fuertes el maoísmo, el trotskismo y otras variantes de las tendencias políticas marxistas, lo cual, por una parte, convirtió a estos sindicatos en fuertes opositores del gobierno militar, pero por otra parte, les impidió lograr la unidad necesaria para consumar su intento de crear una nueva central sindical llamada Comité de Coordinación y Unificación Sindical Clasista (CCUSC).

Cuando los esfuerzos de los militares por asegurarse la lealtad, la colaboración y la paz laboral de los sindicatos existentes por medio de la división y los incentivos fracasaron, se tomó la decisión de crear una nueva central sindical, la CTRP, como un modelo de sindicalismo "responsable" y un instrumento para ampliar el control directo sobre el movimiento obrero organizado.

Una vez más surgieron discrepancias en cuanto a la estrategia, en este caso centradas en la disyuntiva de construir la nueva central sindical desde abajo hacia arriba o de cooptar a las organizaciones existentes y trabajar desde arriba hacia abajo. La primera estrategia fue apoyada por los organizadores del SINAMOS, la segunda por un grupo de oficiales agrupados alrededor del ministro de Pesca, Tantaleán Vanini, quien estaba utilizando el sindicato de los pescadores como una base para construir la CTRP (y su poder personal). Aunque el SINAMOS dirigía formalmente el esfuerzo organizativo, la facción de Tantaleán siguió su propia estrategia simultáneamente y logró, en diciembre de 1972, organizar el Congreso Constituyente de la CTRP, que consistió en federaciones sindicales apresuradamente compuestas que a su vez fueron creadas con muchos sindicatos de base cuyos dirigentes habían sido conquistados mediante los recursos combinados de la cooptación y la intimidación. En consecuencia, mientras los organizadores patrocinados por el gobierno propagandizaban ampliamente las ventajas que para los trabajadores significaba la formación de sindicatos, la legitimidad de la CTRP era socavada por las tácticas manipuladoras implícitas en su formación y su reconocimiento oficial. Esta situación dio a los organizadores de la CGTP y de los sindicatos independientes la oportunidad de aprovechar la campaña organizativa auspiciada por el gobierno.

Además de sus procedimientos organizativos manipuladores, la explícita política de conciliación de clases y de rechazo de toda acción huelgaria en favor del "diálogo constructivo" seguida por la CGTP, le impidió a ésta ganar un apoyo sólido entre los trabajadores en importantes sectores de la economía, donde la experiencia de los conflictos y el ejemplo dado por otros sindicatos hacían particularmente obvia la insensibilidad de la dirección de la CTRP. Las cifras del registro de sindicatos del Ministerio del Trabajo revelan que entre 1973 y agosto de 1975, la CGTP logró afiliar tantos nuevos sindicatos como la CTRP (Tabla 6). Además, estas cifras seguramente subestiman la fuerza de la CGTP debido al gran número de sindicatos cuya afiliación no se registró.

Era bien sabido que los sindicatos de la CTRP recibían trato preferencial en sus solicitudes de reconocimiento oficial, en tanto que las formalidades impuestas a otros sindicatos consumían mucho tiempo. En consecuencia, se esperaba que todos los sindicatos de la CTRP declararan su afiliación, en contraste con los sindicatos de la CGTP. De hecho, los sindicatos a menudo declaraban su afiliación a la CTRP y luego se pasaban a la CGTP

tan pronto como recibían el reconocimiento oficial.¹⁶ Ello no obstante, esos sindicatos aparecen como afiliados a la CTRP en esta Tabla porque la afiliación era registrada en el momento del reconocimiento.

Según las cifras ofrecidas por el SINAMOS, la CTRP había sobrepasado numéricamente a la CGTP hacia 1977. Estas cifras, sin embargo, deben tomarse con dos granos de sal dado su origen y el hecho de que dan cuenta de menos de la mitad de los sindicatos existentes en aquel momento. Los 2 520 sindicatos no mencionados en las cifras de SINAMOS contribuyen indudablemente a la subestimación de la fuerza de la CGTP. Pero aun si le concediésemos superioridad numérica a la CTRP, ésta no logró convertirse en la fuerza dominante en el movimiento obrero peruano porque no logró penetrar los sectores decisivos de la economía. En el sector industrial-manufacturero, la CGTP controlaba el 38 por ciento de los sindicatos reconocidos en 1973-75, la CTRP el 23 por ciento; en la minería, la CTRP logró afiliar un total de cinco sindicatos. Su mayor éxito organizativo tuvo lugar en los sectores del comercio y los servicios, particularmente entre el personal de ventas y transportes y los trabajadores de las comunicaciones. Ello no obstante, la campaña organizativa del gobierno no produjo la deseada nueva y dominante central sindical capaz de lograr la paz laboral y la aceptación de las directivas gubernamentales. Por el contrario, la campaña fortaleció aún más la organización obrera autónoma y, en consecuencia, la capacidad de acción colectiva del movimiento obrero, contribuyendo así a la elevación de los índices de huelgas que adquirieron proporciones alarmantes de 1973 en adelante.¹⁷

RAZONES DEL INCREMENTO EN LA MILITANCIA OBRERA

Para dilucidar las razones de este incremento en la militancia, el comportamiento huelgario debe verse en el contexto de la situación económica y política total del movimiento obrero organizado; y el análisis tiene que ir más allá del simple agregado de

¹⁶ Esta práctica me fue señalada por varios dirigentes sindicales, así como por un funcionario del Ministerio del Trabajo.

¹⁷ El fracaso del gobierno de Velasco en su intento de crear una central sindical dominante auspiciada por el gobierno contrasta marcadamente con el buen éxito de la incorporación del movimiento obrero mexicano bajo Cárdenas. La principal variable que explica esta diferencia es el grado de organización obrera anterior y la consiguiente competencia y efecto de demostración por parte de los sindicatos autónomos. Para un tratamiento histórico teórico y comparativo de las posibilidades de una instauración venturosa de regímenes corporativistas, véase Stepan (1978, pp. 46-113).

cifras sobre la frecuencia de las huelgas para incluir los cambios en las pautas huelgarias.¹⁸ Una gran parte del incremento en la militancia se debió obviamente al incremento en la sindicalización. De hecho, se puede incurrir fácilmente en el error de atribuir todo el incremento a la formación de nuevos sindicatos porque el número de huelgas por sindicato reconocido no revela ningún aumento sustancial sobre los últimos años del gobierno de Belaúnde (este número va de 0.19 a 0.22 en 1965-67, y de 0.14 a 0.21 en 1973-75). La propensión de los nuevos sindicatos a declarar huelgas puede explicarse como su intento de ganarse el respeto de los empresarios y de la burocracia estatal, y la lealtad de los trabajadores. Para el caso peruano, el ex ministro del Trabajo Sala Orosco ofreció una explicación adicional cuando se le entrevistó en 1976. Sala Orosco observó que, debido al papel central del Ministro en todas las relaciones laborales, éste se veía inundado con solicitudes de intervención en procesos de contratación colectiva, lo cual conducía a retrasos que a su vez provocaban frecuentemente breves huelgas de protesta por los sindicatos. Un examen más detenido de la actividad huelgaria en las empresas industriales a través de un análisis retrospectivo revela que, independientemente de todos los demás determinantes de la actividad huelgaria, la presencia de un nuevo sindicato era ciertamente un fuerte predictor del número total de horas-hombre perdidas (Tabla 7).¹⁹

18 Shorter y Tilly (1974) y Korpi y Shalev (1980) hicieron aportaciones precursoras a tal análisis de las huelgas. Nuestro examen está inspirado en su enfoque. Un examen más extenso del desarrollo de las pautas huelgarias en el Perú aparece en Stephens (1980, pp. 195-204).

19 La regresión muestra que el tamaño de la empresa era el predictor más fuerte de la militancia. Esta relación se manifestó regularmente y también para otras formas de militancia tales como las quejas de las CI. La misma puede explicarse por una más larga tradición de sindicalización y por la mayor confianza en su propia fuerza que los trabajadores ganaron al ser más numerosos. Para un examen de las variables en la regresión, véase Stephens (1980, pp. 131-35).

Tabla 6

NÚMERO DE SINDICATOS POR AFILIACIÓN

Afiliación	Total reconocido	Por ciento de sindicatos			Total afiliado en 1977
	1973- 1975	1973	1974	1975	
CTP'	15	1	3	1	226
CGTP	177	22	24	24	671
CNT	16	1	3	3	118
CTRP	188	23	22	36	918
Independientes	69	3	16	9	
Falta información	301	49	32	27	2520
Total	766	100	100	100	4453

FUENTES: Datos para 1973.75 tomados del Registro de Sindicatos, Ministerio del Trabajo; datos para 1977 tomados de *Realidad 5* (julio de 1979), publicada por SINAMOS, citado por Scurrah y Esteves (de próxima publicación).

Tabla 7

RETROSPECTIVA DEL NÚMERO TOTAL DE HORAS-HOMBRE PERDIDAS POR TRABAJADOR EN 1973-1975, EN TODAS LAS EMPRESAS CON UNA CI RECONOCIDA Y MÁS DE VEINTE TRABAJADORES*

Variables independientes	Beta	y simple
Número de empleados	0.27	0.37
Presencia de un nuevo sindicato	0.21	0.25
Promedio anual de remuneración	0.12	0.26
Distribución del 10% de las uti- lidades en efectivo a través de	-0.1	0.02
Presencia de un viejo sindicato	0.08	0.19
Proporción de capital empresa-	0.06	0.04
Incremento en el promedio de remuneración 1971 a 1973	0.06	0.15

FUENTES: Datos de las CI (véase nota 6) ; y Evelyne Huber Stephens, *The Politics of Workers' Participation: The Peruvian Approach in Comparative Perspective* (Nueva York, Academic Press, 1980), p. 132.

*R² = 0.20; N = 1075.

Con todo, hay razones para sugerir que no todo el incremento en militancia puede atribuírsele a los nuevos sindicatos. En primer lugar, alrededor de una cuarta parte de los nuevos sindicatos estaban afiliados a la CTRP, y los sindicatos de la CTRP seguían una clara y consecuente política no huelgaria. En segundo lugar, los nuevos sindicatos se formaron mayormente en empresas medianas y pequeñas, en tanto que la magnitud de las huelgas (es decir, el número medio de huelguistas por huelga) aumentó. Esta tendencia sugiere que sindicatos más antiguos (y mas grandes) también se hicieron más militantes o que se produjo un aumento en las huelgas por solidaridad o ambas cosas. A fin de sustanciar este punto, es necesario un examen más detenido de los cambios en las pautas huelgarias y sus causas.

A fin de entender las pautas huelgarias, es necesario ver las huelgas como un arma por medio de la cual el movimiento obrero organizado intenta mejorar la participación de la clase obrera en la distribución de los recursos materiales y el poder en la sociedad. Allí

donde el movimiento obrero dispone de un arma alternativa (como el acceso a un gobierno obrerista), el uso del arma de la huelga, que obviamente entraña costos tanto para los trabajadores como para los patronos, puede evitarse. De tal suerte, las sociedades que cuentan con movimientos obreros fuertes e influyentes —es decir, movimientos obreros caracterizados por una penetración organizativa extensa, una alta centralización, unidad política y colaboración con un partido político, como es el caso de los escandinavos— tienen índices huelgarios muy bajos. En contraste, allí donde el movimiento obrero es organizativa y políticamente débil y se caracteriza por la organización de sólo una pequeña porción de la fuerza de trabajo, una baja centralización y la desunión política, las huelgas y las amenazas de huelga tienden a ser el recurso potencialmente más efectivo disponible.²⁰ Allí donde el movimiento obrero también es económicamente débil debido a factores tales como un alto desempleo, y el gobierno juega un papel importante en las relaciones laborales (una situación típica de las sociedades capitalistas dependientes), la presión huelgaria tiende a ser ejercida tanto o más sobre el gobierno que sobre los patronos. El que la presión huelgaria ejercida sobre el gobierno sea efectiva depende de la amenaza de crear dificultades económicas, es decir, de la capacidad del movimiento obrero para movilizar grandes núcleos de trabajadores en acción solidaria. Así pues, en tales situaciones la pauta esperada sería la de grandes huelgas que son relativamente frecuentes a fin de mantener la presión, pero breves a fin de no infligir altos costos materiales a los trabajadores participantes.

Los cambios en las pautas huelgarias en el Perú (Tabla 8) pueden explicarse de la siguiente manera. La magnitud y la duración de las huelgas no cambió de ningún modo consecuente entre los últimos años del gobierno de Belaúnde y los primeros del de Velasco. Una declinación claramente visible en la frecuencia, sin embargo, puede advertirse como resultado de la política gubernamental de puertas abiertas. En su intento de obtener la aceptación del movimiento obrero por medio de la persuasión y los incentivos, el gobierno dio la impresión de ser, y en cierta medida fue, sensible a las demandas laborales; en consecuencia, los dirigentes sindicales aprovecharon los canales de acceso al Ministerio del Trabajo. Cuando el gobierno se sintió insatisfecho con los resultados de esta estrategia, sin

²⁰ Obviamente, esta generalización requiere que los trabajadores posean cierto grado de organización y autonomía. Es claro que no cabe esperar una acción huelgaria militante de un movimiento obrero que está completamente desorganizado o sea fuertemente reprimido.

embargo, y decidió cerrar esos canales y crear la CTRP, la única manera que tuvo el movimiento obrero de reconquistar influencia fue transformar sus avances organizativos en movilización para la acción huelgaria. El cierre de esos canales en 1973 coincidió con una disminución de los aumentos salariales, añadiendo así una base económica a los motivos políticos para la militancia, motivos que desde luego fueron reforzados por el desencadenamiento de la crisis económica y el deterioro de los salarios reales en 1974 y 1975. En 1973, pues, la frecuencia de las huelgas aumentó dramáticamente, y la forma de las huelgas también cambió, haciéndose generalmente mucho más amplias y breves.

Esta forma cambiante de las huelgas indica la creciente importancia de las huelgas de protesta dirigidas contra el gobierno y la capacidad cada vez mayor del movimiento obrero para la movilización solidaria mediante la coordinación de la acción huelgaria entre varios sindicatos. Muchas de estas huelgas de protesta en 1973 fueron manifestaciones de una reacción solidaria por parte de las organizaciones obreras en defensa de su autonomía contra la promoción gubernamental de la CTRP y sus ataques verbales al "sindicalismo politizado irresponsable", así como contra las agresiones físicas a los dirigentes sindicales y los ataques a los locales de los sindicatos llevados a cabo por el Movimiento Laboral Revolucionario, un grupo militante inspirado por la facción de Tantaleán.

Además, en 1973 estalló una serie de largos y enconados conflictos laborales regionales basados en motivos políticos que incluyeron huelgas de solidaridad de las federaciones sindicales departamentales. Por ejemplo, un conflicto en la compañía acerera de propiedad estatal, SIDERPERÚ, estalló en Chimbote a causa de despidos ilegales que habían sido resultado de una huelga general de la Federación Sindical Departamental de Ancash y que condujeron a otras huelgas de solidaridad y a la declaración de un estado de emergencia. De manera similar, las acciones de protesta contra los arrestos de miembros del sindicato de maestros en Arequipa también se convirtieron en huelgas regionales de solidaridad; en consecuencia, se declaró un estado de emergencia en Arequipa en mayo y una vez más en noviembre de 1973. Los datos relativos a las huelgas revelan la importancia de estos conflictos regionales: en 1973, el 29 por ciento de todas las horas-hombre perdidas a causa de las huelgas en el sector industrial-manufacturero se perdieron en las provincias, en comparación con el 7 por ciento en 1974 y el 9 por ciento en 1975.

Tabla 8

FORMA DE LAS HUELGAS EN EL PERÚ, 1965-1975, TODOS LOS SECTORES

Año	Tamaño ¹	Duración ²	Frecuencia ³
1965	342	5.9	20.5
1966	308	12.0	19.5
1967	344	7.4	19.7
1968	296	3.9	16.6
1969	246	5.3	16.3
1970	322	6.5	14.7
1971	428	8.4	15.2
1972	319	6.1	15.7
1973	528	4.7	28.7
1974	636	4.6	19.6
1975	792	4.1	25.6
1976	587	3.3	14.1
1977	1 737	2.0	7.3
1978	3 842	3.2	11.0
1979	811	1.9	18.8

FUENTES: *Las huelgas en el Perú 1957-1972*, Ministerio del Trabajo, Lima, 1973; y cálculos por el autor

basados en el *ILO Yearbook of Labour Statistics* para 1976 y 1980 y estadísticas inéditas del Ministerio del Trabajo.

- 1 Número medio de huelgistas por huelga
- 2 Número medio de horas-hombre perdidas por huelguista
- 3 Número de huelgas por 100 000 población no agrícola económicamente activa

Estos conflictos regionales fueron una manifestación temprana de un fenómeno que cobró considerable importancia en las acciones de protesta y de huelga durante la administración de Morales Bermúdez: los avances organizativos y, por consiguiente, en la militancia logrados en las provincias. Los ejemplos más impresionantes son las huelgas a escala nacional que tuvieron éxito tanto en las provincias como en Lima. Pero en varios casos, las olas de protestas, motines y huelgas se originaron en las provincias en respuesta a las políticas económicas del gobierno o a los despidos de trabajadores, tales como los que ocurrieron en Chimbote en diciembre de 1977 y en Arequipa en mayo de 1978.

En 1974 y 1975, la acción huelgaria siguió fuertemente concentrada en la región de Lima-El Callao. Aumentaron las demandas de intervención gubernamental para proteger los niveles de consumo de los trabajadores contra los efectos de la depresión económica y también en favor de cambios en el trato que el Ministerio del Trabajo daba a los sindicatos no afiliados a la CTRP. Aunque las huelgas de protesta política y las huelgas de solidaridad no llegaron a ser la forma dominante de actividad huelgaria en el Perú, su creciente importancia y el reforzamiento subyacente de la capacidad de movilización del movimiento obrero se convirtieron en una preocupación capital para el gobierno. Un examen más detenido de las razones que subyacían a la actividad huelgaria en el sector industrial-manufacturero en 1973-75 revela que de la mitad a las dos terceras partes de todas las huelgas tuvieron lugar en torno a los salarios y las condiciones de trabajo (Tabla 9). Las huelgas de solidaridad y las huelgas declaradas por "otras" razones, que incluían reclamos políticos dirigidos al gobierno, constituyeron aproximadamente de una cuarta a una tercera parte de todas las huelgas. Estas huelgas, sin embargo, movilizaron grandes números de trabajadores, entre el 40 y el 50 por ciento de todos los trabajadores que fueron a la huelga, y fueron costosas en términos de horas-hombre perdidas, sumando aproximadamente el 40 por ciento de todas las horas-hombre perdidas durante ese periodo.

Tabla 9

RAZONES DE LA ACTIVIDAD HUELGARIA EN LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Razones	% de todas las huelgas			% de todos los trabajadores participantes			% de todas las horas-hombre perdidas		
	1973	1974	1975	1973	1974	1975	1973	1974	1975
Salarios / condiciones	53.2	54.5	66.3	37.9	33.2	43.5	50.2	50.0	45.8
Despidos / suspensiones	16.8	10.6	9.1	13.7	11.6	5.3	11.8	7.7	9.9
Asuntos sindicales	2.3	1.6	1.9	9.0	1.8	1.3	2.1	0.5	1.7
Solidaridad	14.2	6.1	9.1	29.9	33.4	34.0	28.4	32.7	20.9
Otras	13.2	27.2	13.6	9.4	20.0	15.9	7.5	9.1	21.7
	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	(423)	(312)	(427)						

FUENTES: Datos de las CI (véase nota 6) ; y Evelyne Huber Stephens, *The Politics of Workers' Participation: The Peruvian Approach in Comparative Perspective* (Nueva York, Academic Press, 1980), p. 201.

Esta capacidad de movilización en gran escala representó un evidente obstáculo para los esfuerzos del gobierno de Morales Bermúdez para poner en práctica estrictas medidas de austeridad económica en la segunda fase. Una diversidad de factores, algunos de los cuales escapaban al control del gobierno y otros que eran inherentes al modelo desarrollista elegido, causaron una severa crisis en la balanza de pagos que obligó al gobierno a negociar préstamos de emergencia a cambio de políticas de estabilización económica, primero con un consorcio de bancos privados y después con el FMI.²¹ Los efectos previsibles de las medidas de estabilización monetaria en los niveles de consumo de las clases bajas urbanas exigían un debilitamiento de la capacidad de defensa del movimiento obrero. Obviamente, el gobierno desalentó la organización laboral, como lo indica el pequeño número de sindicatos reconocidos en 1977 y 1978. Además, los anteriores y leves intentos de aplicar

21 Para un análisis de los factores que contribuyeron a la crisis económica, véase Fitzgerald (1976, pp. 61-77 y 93-107), Stepan (1978, pp. 282-301), Stephens (1980, pp. 219-28) y Thorp y Bertram (1978). Para las relaciones del Perú con los bancos privados extranjeros, véase Stallings (1979, pp. 217-53).

las restricciones legales a la actividad huelgaria fueron remplazados a comienzos de 1976 por medidas más efectivas, tales como la declaración de un estado de emergencia en sectores decisivos de la economía amenazados por las huelgas (por ejemplo, en la minería y la pesca) y el despido de numerosos trabajadores en huelga. Hacia mediados de 1976, el estado de emergencia se extendió a todo el país y los dirigentes obreros quedaron sujetos a arresto y deportación. Estas medidas represivas, junto con las políticas cada vez más estrictas de austeridad económica que hacia 1979 redujeron los salarios reales a un 62 por ciento de su nivel en 1973 (*Latin America Political Report*, 28 de marzo de 1980), intensificaron la propensión del movimiento obrero a las reacciones defensivas solidarias. En julio de 1977 se llevó a cabo con éxito la primera huelga general en la historia del Perú, seguida por otras confrontaciones masivas con el gobierno. Como se mencionó anteriormente, muchas de estas confrontaciones tuvieron lugar en ciudades provinciales como Arequipa, Huancayo, Cuzco, Huánuco y Huancavelica. Las mismas tendían a implicar no sólo a los sindicatos, sino también a las organizaciones populares, algunas de las cuales se formaron espontáneamente para coordinar manifestaciones y huelgas, y otras tenían una base más permanente en los habitantes de las barriadas, los estudiantes o los miembros de las cooperativas agrarias. El gobierno militar respondió a las actividades populares de protesta con la represión, aunque de naturaleza moderada en comparación con Chile, la Argentina o el Brasil. En lugar de consolidar más su régimen y de intensificar los controles, el gobierno militar decidió prepararse para la transición al régimen civil.

El gobierno civil del presidente Belaúnde está obligado a enfrentarse al mismo problema de aplicar políticas económicas que restringen el consumo popular frente a un movimiento obrero que conoció condiciones de mejoramiento una década antes y que ha incrementado notablemente su capacidad de movilización. Con todo, la actual fuerza del movimiento obrero y popular peruano no debe sobreestimarse. Los cambios ocurridos desde 1968 son dramáticos en el nivel organizativo, pero aún persisten dos debilidades fundamentales.

Primero y sobre todo, el movimiento obrero organizado sigue debilitado como fuerza política a causa de su fragmentación organizativa y política. De hecho, estas divisiones han cobrado renovada importancia debido a los estrechos vínculos existentes entre sindicatos y partidos políticos que en ocasiones han intentado utilizar su influencia en el movimiento obrero para sus propios fines en la recién reabierta competencia por el poder. Esta situación

se ha dado claramente en el caso del APRA, cuando las fuerzas de la CTP han intensificado sus (a veces violentos) intentos de recuperar el control sobre varios sindicatos.²² Las desavenencias entre el Partido Comunista y diversos partidos de izquierda vinculados con sindicatos independientes han obstruido la acción coordinada entre esos sindicatos y la CGTP, y es probable que sigan obstruyéndola. Varios intentos de convocar huelgas generales han fracasado debido a la renuencia de la CGTP (y del Partido Comunista) a enfrentarse en una confrontación abierta con el gobierno militar por temor a interrumpir la transición a un régimen civil.²³ Los sindicatos más radicales, vinculados a grupos maoístas y trotskistas, tales como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana o SUTEP, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú o FNTMMP, y los mineros de Centromin (la empresa minera de propiedad estatal) son renuentes a colaborar con la CGTP debido a la postura "acomodatícia" de ésta y a su subordinación al "socialimperialismo" que emana de Moscú. El problema de la desunión política es tan grave, si no más, para otras organizaciones populares, tales como los frentes basados en las barriadas, porque muchos de ellos fueron formados por activistas políticos con afiliaciones exclusivas.

La segunda debilidad del movimiento obrero organizado se advierte en su lucha con los patronos. Su posición económicamente precaria en una sociedad con un alto índice de desempleo y un nivel de salario real que apenas garantiza la subsistencia sigue viéndose agravada por la crisis económica.

Con todo, pese a que el movimiento obrero y otras organizaciones populares distan de poder aglutinar la fuerza suficiente para forzar cambios estructurales importantes en su favor a expensas del capital y de la clase media, representan no obstante un nuevo factor en la relación de poder en la sociedad peruana. La presencia de este nuevo factor se manifiesta no sólo al nivel de la acción directa, sino también al nivel de las instituciones políticas representativas. La creciente organización del movimiento obrero y de los grupos populares ha contribuido claramente a la mayor fuerza electoral de la izquierda. La relación entre la organización popular y la fuerza electoral de la izquierda requiere ser examinada en el

22 Los ataques de los "búfalos" (matones) del APRA a los locales sindicales y otros lugares fueron un fenómeno muy conocido durante las campañas electorales.

23 Angell (1979) menciona varios casos de esta naturaleza. Su análisis del movimiento obrero peruano proporciona buena información sobre la importancia de las diferencias políticas entre las diversas confederaciones, federaciones y sindicatos independientes.

contexto de los otros factores que contribuyen al nuevo papel político de la izquierda. En ausencia de material de encuesta o de datos electorales de conjunto para análisis estadístico, este examen debe basarse en inferencias de las fluctuaciones y la ubicación del apoyo electoral de la izquierda tal como se desprende de las informaciones periodísticas.

RAZONES DEL AUMENTO DE LA FUERZA ELECTORAL DE LA IZQUIERDA

Los procesos que se desarrollaron tanto a nivel de masas como de liderato crearon la posibilidad de traducir la organización y la militancia populares en fuerza electoral izquierdista. En primer lugar, los sindicatos y otras organizaciones populares constituyeron valiosos canales de comunicación política y para incrementar la votación en la competencia por el apoyo electoral. La existencia de un electorado numeroso, anteriormente no movilizado, también ayudó al éxito de la izquierda en la generación de un apoyo electoral. El intervalo de quince años entre las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1963 y las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978, junto con la reducción de edad de los votantes a dieciocho años, significaban que más de la mitad del electorado potencial nunca había votado anteriormente.²⁴ Aun cuando los partidos políticos de izquierda se enfrentaban a la competencia del centro y la derecha, no tenían que forzar su entrada en alineamientos políticos anteriores en gran escala, sino que se beneficiaban de la "igualdad de posibilidades" en la búsqueda del apoyo de los votantes recién movilizados.²⁵

Los partidos que compitieron en las elecciones de 1978 y que lograron ganar escaños en la Asamblea Constituyente fueron los siguientes: en la derecha, el Partido Popular Cristiano (PPC), la Unión Nacional Odriísta (UNO), el Movimiento Democrático Peruano (MDP) ; en el centro, el APRA, con su pasado historial izquierdista y su reciente historial derechista y una posición de centro-izquierda en 1978, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) ; y en

24 Por consiguiente, las encuestas de opinión citadas por Handelman (1980, p. 5) mostraron que la información política y el reconocimiento de los partidos entre los adultos de Lima en fecha tan tardía como 1977 eran muy limitados. El 23 por ciento nunca había oído hablar del APRA y el 43 por ciento nunca había oído mencionar a la Acción Popular, el partido de Belaúnde; sólo el 10 por ciento entendía que la Asamblea Constituyente tenía por objeto elaborar una nueva Constitución.

25 Debido a la expansión del electorado, la mayoría de los partidos lograron ampliar su apoyo en términos de números absolutos de votos. Una comparación de los votos recibidos por los diversos candidatos presidenciales en 1962, 1963 y 1980 revela que sólo los candidatos de la derecha perdieron apoyo en términos absolutos. Pero aunque el número de votos obtenidos por el APRA se duplicó y el de la AP se triplicó, los votos obtenidos por la izquierda combinada aumentaron doce veces.

la izquierda, el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú (FOCEP), el Partido Comunista Peruano (PCP), el Partido Socialista Revolucionario (PSR), la Unidad Democrática Popular (UDP) y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC). Acción Popular (AP), el partido de Belaúnde, decidió no participar en las elecciones de 1978 por la razón oficial de que una revisión de la Constitución de-hería posponerse hasta después de las elecciones presidencia-les generales que debían efectuarse lo antes posible. Extra-oficialmente, el partido veía con suma suspicacia la estrecha relación práctica entre el APRA y el gobierno militar, que el presidente Morales Bermúdez había iniciado en una clara ruptura con la historia de antagonismo mutuo a fin de asegurar una transición ordenada.

ELECCIONES PRESIDENCIALES	NÚMERO ABSOLUTO DE VOTOS (1,000)				<i>Aumento en 1980</i>
	1962-63/1980	1962	1963	1980	
Derecha		481	463	395	0.82
Odría/Bedoya Reyes					
Haya/Villanueva		558	623	1130	2.03
AP		544	709	1871	3.44
Belaúnde/ Belaúnde					
Centro-izquierda		49	—	—	—
Demócratas Cristianos					
Izquierda		60	19	728	121
Total de votos válidos		1693	1815	4124	2.44

FUENTES: Para 1962 y 1963, Roncagliolo (1980) ; Para 1980, DESCO, citado en Woy-Hazleton (1980).

La UNO representaba a la vieja derecha, que había perdido su base de poder con la vieja oligarquía así como su base popular cuando sus vínculos paternalistas con las barriadas quedó roto. El PPC emergió como el nuevo partido dominante en la derecha, formado por hombres de negocios y abogados de los nuevos sectores urbanos industriales, comerciales y financieros para defender una línea pro-sector privado fuerte pero pragmática. El FOCEP y

la UDP fueron creados como coaliciones de organizaciones radicales obreras, estudiantiles, de barriada y campesinas con diferentes inclinaciones ideológicas; Los trotskistas dominaban el FOCEP y los maoístas la UDP. El PCP es el viejo Partido Comunista (tanto en longevidad de existencia cuanto en la edad de su liderato) ; había asumido una línea consecuentemente pro-Moscú, al mismo tiempo que le dio fuerte apoyo al gobierno militar durante la primera fase y se abstuvo de criticarlo con aspereza durante la segunda fase. El PSR es el partido formado por los dirigentes de alto nivel más radicales del régimen velasquista, y el FNTC es un partido de base regional en la zona de Puno.

La demostración de fuerza del APRA no fue ninguna sorpresa porque el partido siempre había logrado conservar una fuerte organización de base, a despecho de su viraje a la derecha y de la erosión de su influencia en el movimiento obrero organizado. El PPC era fuerte en Lima, que aportaba aproximadamente el 60 por ciento de sus votos (Handelman 1980, p. 12). En particular, las áreas de clase media en Lima y los suburbios votaron nutridamente por el PPC. La demostración de fuerza de la izquierda superó incluso las esperanzas de sus propios dirigentes, muchos de los cuales no habían esperado más de una cuarta parte de los votos para todos los partidos de izquierda (Handelman 1980, p. 12). La izquierda obtuvo un fuerte apoyo electoral en las barriadas; el FOCEP se mostró particularmente fuerte en las barriadas de Lima.

Al nivel de la dirección política, el legado del régimen velasquista para la izquierda aportó numerosos dirigentes populares experimentados en la organización política. Varios dirigentes políticos de izquierda del periodo anterior a 1968 y muchos nuevos egresados de las universidades también asumieron posiciones en el aparato estatal que los pusieron en contacto con las organizaciones obreras, campesinas y de barriada. Estos dirigentes y funcionarios tendieron a favorecer la movilización popular como un medio de fortalecer a las fuerzas más progresistas dentro del gobierno. Hacia los últimos tiempos del gobierno de Velasco y durante la era de Morales Bermúdez, esos funcionarios fueron trasladados a posiciones puramente administrativas o bien fueron despedidos. Ello no obstante, constituyeron una reserva de liderato con capacidades organizativas, contactos y cierto grado de visibilidad política. Además, su experiencia había agudizado su percepción de la necesidad y el potencial para trabajar en favor del cambio social mediante el fortalecimiento de la organización política popular a fin de obtener el control sobre una diversidad

de instituciones sociales. Así, pues, un número considerable de dirigentes capaces contribuyeron a la formación de grupos y partidos políticos y fueron capaces de generar un apoyo electoral popular. El grupo más visible formado por dirigentes del periodo velasquista fue el PSR, fundado por los generales Leonidas Rodríguez (antiguo director del SINAMOS), Arturo Valdez Palacio (antiguo jefe del Comité de Asesoramiento de la Presidencia) y otros oficiales de alto rango. Además de estos ex-funcionarios de alto nivel que formaron su propio partido velasquista, hubo muchos ex-funcionarios de nivel inferior que desarrollaron actividades en una diversidad de organizaciones y partidos políticos populares.²⁶

La demostración de fuerza de la izquierda se vio favorecida además por la declinante actividad de movilización popular del APRA y por la erosión de la influencia de la Confederación de Trabajadores Peruanos en el movimiento obrero que había empezado en la década del sesenta y continuó bajo el gobierno militar. La crisis de sucesión causada por la enfermedad y muerte de Haya de la Torre creó tensiones dentro de la organización y dañó más aún la capacidad del APRA para competir ventajosamente con la izquierda por el apoyo de los nuevos votantes fuera de los baluartes apristas tradicionales en el norte del país. Para el momento de las elecciones municipales de noviembre de 1980, el APRA había sido desplazado no sólo por la AP, sino también por la coalición izquierdista Izquierda Unida (IU), partidos que constituían la primera y la segunda fuerza política en el país respectivamente. Además, la derecha tradicional, representada por la UNO, había perdido su atractivo en las barriadas porque se había basado en relaciones paternalistas y de clientela que el general Odría había creado originalmente durante su presidencia (1948-56) y que su partido había mantenido hasta 1963.²⁷ El tradicional atractivo o control de la derecha sobre los votantes en las zonas rurales había empezado a desgastarse ya antes de

²⁶ Obviamente, la mayoría de los dirigentes políticos izquierdistas antes de 1968 no siguieron esta pauta ni la mayoría de los dirigentes políticos actuales de la izquierda surgieron de una carrera de ese tipo. Elio no obstante, las políticas de movilización durante la primera fase tuvieron como resultado la formación de un grupo experimentado de dirigentes políticos potenciales. Aunque la mayor parte de los candidatos principales de los partidos políticos de izquierda nunca habían trabajado en el gobierno de Velasco, muchos de los organizadores y dirigentes de organizaciones populares que desempeñaron funciones importantes en la generación de apoyo popular para esos candidatos sí lo habían hecho. Hugo Blanco ejemplifica un dirigente izquierdista que no estuvo asociado con el gobierno de Velasco, pero que obtuvo apoyo de dirigentes y activistas que habían surgido bajo el régimen. Encarcelado por actividades guerrilleras y después liberado en 1970, Blanco se negó a aceptar el puesto que le ofreció el gobierno de Velasco. En 1978 obtuvo un fuerte apoyo electoral para el FOCEP en las barriadas de Lima, donde SINAMOS había estado muy activo bajo Velasco.

²⁷ Véase Collier (1976) para un examen de la relación de la UNO con la población de las barriadas.

1968 y fue eliminado por la reforma agraria. ¿Por qué, entonces, no capturó la izquierda una porción mayor de votos populares, y a qué puede atribuirse su demostración de fuerza comparativamente débil en las elecciones presidenciales?

Dos factores estructurales principales le han impedido a la izquierda adquirir una mayor fuerza política: la fragmentación ideológica y organizativa y una precaria base financiera. Estructuralmente, la izquierda está escindida en muchos pequeños grupos o partidos que constituyen una diversidad de coaliciones cambiantes que dependen de las compatibilidades tanto ideológicas como personales. En primer lugar, la izquierda está dividida entre partidos marxistas y no marxistas. Los partidos no marxistas de la izquierda son el Partido Socialista Revolucionario (PSR) formado por prominentes funcionarios del gobierno velasquista, que se dividió en una facción marxista y otra no marxista después de las elecciones a la Asamblea Constituyente, y el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos de base regional. La Acción Popular Socialista es clasificada como de centro-izquierda, al igual que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), por algunos (Handelman 1980), pero como de izquierda por el autor del presente trabajo y otros (Woy-Hazleton 1980); ciertamente es un grupo no revolucionario. La izquierda marxista está dividida a su vez entre el Partido Comunista Peruano de orientación pro-soviética, la marxista independiente Vanguardia Revolucionaria (VR), el Comité Obrero Revolucionario (COR), los dos grupos mixtos conocidos como el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú (FOCEP), que tiene fuertes tendencias trotskistas, y la Unidad Democrática Popular (UDP), de tendencia predominantemente maoísta, y varios grupos más pequeños e ideológicamente exclusivistas, tales como el maoísta Patria Roja (PR), el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), así como varios otros grupos.²⁸ El FOCEP había surgido de las elecciones de 1978 como el grupo izquierdista más fuerte, y se hallaba por consiguiente en una posición favorable para jugar un papel dirigente en la forja de una alianza electoral izquierdista para 1980. Varios intentos de formar una coalición amplia con otros grupos fracasaron, sin embargo, debido a la incompatibilidad ideológica. En lugar de ello, varias coaliciones pequeñas, tales como la Unidad de Izquierda (UI), el Partido

²⁸ El examen que sigue a continuación se apoya considerablemente en Woy-Hazleton (1980) en lo tocante a la información específica y en conversaciones personales con observadores peruanos por lo que se refiere a los comentarios generales. Véase también *Latin America Regional Reports: Andean Group*, 12 de diciembre de 1980, Londres.

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) y la Unidad Democrática Popular (UDP) compitieron por el apoyo popular entre sí y con partidos que auspiciaban a sus propios candidatos, incluida la pseudoizquierda Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), encabezada por el manipulador Tantaleán Vanini.

Claramente, la fragmentación organizativa y una base financiera precaria afectan las elecciones en diferentes niveles de manera variable. Son más perjudiciales en las campañas nacionales, en las que el acuerdo en cuanto a uno o unos cuantos candidatos y la publicidad a través de los medios masivos de comunicación son prerequisites del éxito, y menos perjudiciales en las elecciones locales, en las que se dispone de más opciones para la creación de coaliciones y para las campañas a nivel de base. Así, era de esperarse que la izquierda mostrara su mayor debilidad en las elecciones presidenciales. La particular constelación politico-electoral que rodeó la elección de 1980 redujo más aún el voto para los candidatos presidenciales izquierdistas. La regla aprobada por la Asamblea Constituyente postulaba que un candidato podía ser elegido con el 36 por ciento de la votación total. Si ningún candidato ganaba, la elección recaía sobre el Congreso recién elegido. Claramente, la izquierda no tenía posibilidad de ganar la presidencia; los dos candidatos con las mejores oportunidades eran Villanueva del APRA y Belaúnde de la AP. Debido a la arraigada hostilidad entre el APRA y la izquierda, que tenía una larga historia, y a una competencia ocasionalmente violenta por el apoyo popular organizado, muchos partidos de la izquierda votaron por Belaúnde para impedir que el APRA ganara la presidencia. Por otra parte, las ya mencionadas coaliciones cambiantes de diversos candidatos presidenciales potenciales socavaron la confianza de los electores en la capacidad de la izquierda para desafiar seriamente a los candidatos de los principales partidos del centro y la derecha. En las elecciones parlamentarias basadas en la representación proporcional, sin embargo, las posibilidades de los candidatos izquierdistas parecían mejores, en buena medida porque no se emitieron votos izquierdistas en favor de la AP para mantener al APRA fuera del poder. Ello no obstante, la dificultad para presentar un frente unificado y lograr visibilidad nacional perjudicó obviamente a la izquierda en ambas elecciones.

Los resultados de las elecciones municipales de noviembre de 1980 apoyan la tesis de

que la fragmentación organizativa y la debilidad financiera constituyen obstáculos menos importantes a nivel local. La izquierda logró formar una coalición amplia, la Izquierda Unida, para aumentar su parte del voto popular total a 27 por ciento y para ganar el control del gobierno municipal en ocho capitales departamentales por vez primera en la historia del Perú. La IU era particularmente fuerte en el sur, donde ganó una sorprendente victoria sobre la AP en Arequipa, ganó en Puno, Pisco e Ilo, y perdió en Tacna sólo porque allí se habían presentado listas rivales de candidatos izquierdistas. También obtuvo el triunfo en Moquegua (con más de la mitad de los votos), en Pucallpa y en Huaraz. En Lima, la IU era fuerte en las barriadas, ganando en Comas, El Agustino, Independencia, Carabayllo y Villa María del Triunfo, y perdiendo en otras barriadas sólo a causa de la desunión de la izquierda.²⁹

Pueden ofrecerse varias explicaciones de la fuerza demostrada por la izquierda en estas elecciones. En primer lugar, es más fácil ponerse de acuerdo sobre un programa limitado y concreto para la acción política local en el futuro inmediato que sobre la forma futura deseable de una sociedad y sobre las estrategias políticas para la transformación nacional. Por consiguiente, las diferencias ideológicas entre las facciones izquierdistas, que tienden a asumir importancia capital en una campaña nacional, pueden ser superadas en campañas locales por consideraciones más pragmáticas y objetivos comunes para el cambio. En segundo lugar, mientras que en las elecciones nacionales los izquierdistas necesitan ponerse de acuerdo sobre un candidato para encabezar la lista, en las elecciones municipales diversos grupos de izquierda podían negociar el apoyo común para unos cuantos candidatos. En tercer lugar, es mucho más fácil llegar directamente, mediante las organizaciones populares, a un electorado de unos cuantos millares de votantes concentrados en una ciudad o una zona urbana de tamaño mediano que llegar a un electorado mucho más numeroso disperso en zonas urbanas y rurales, situación que reduce la desventaja planteada por el acceso limitado a los medios de comunicación masiva y aumenta la importancia de la capacidad organizativa. De tal suerte, los avances logrados en la organización laboral y popular podían traducirse en votos más fácilmente a nivel local que a nivel nacional. En cuarto lugar, puede suponerse que la solidaridad creada por la

²⁹ Amat presenta cifras que muestran que la fuerza de la IU era mayor en los distritos más pobres de Lima. Ganó en cinco de los seis mencionados, obteniendo entre el 40 y el 49 por ciento de los votos. Véase Amat y León 1981.

acción política conjunta, la visibilidad de los dirigentes locales y las mayores posibilidades de obtener concesiones de las autoridades locales, a diferencia de las nacionales, reforzaron la lealtad de los miembros a sus organizaciones locales y en consecuencia generaron apoyo popular a los candidatos izquierdistas.

Una parte de la diferencia entre los resultados de 1978 y los de 1980 en las elecciones a nivel nacional puede atribuirse al papel desempeñado por el partido de Belaúnde. Si suponemos que en 1978 algunos partidarios de la AP se abstuvieron, algunos votaron por el derechista Partido Popular Cristiano (PPC) y un número menor votó por otros partidos de la derecha, el centro y la izquierda, entonces la participación de la AP en las elecciones de 1980 tenía que reducir la votación de la izquierda, aunque en menor medida que la del PPC. En ausencia de información de encuestas, sin embargo, esta suposición sigue siendo tan sólo una inferencia basada en los votos del PPC.³⁰

Las fluctuaciones en los resultados de las elecciones de 1978 y 1980 indican débiles lealtades partidarias entre los muchos votantes recién movilizados. Uno de los hallazgos más reiterados en la literatura sobre el comportamiento electoral es que las lealtades partidarias se consolidan mientras más prolongado es el apoyo de un individuo a determinado partido. Así, pues, son de esperarse las fluctuaciones continuas en los resultados electorales. A fin de llegar a un estimado mejor fundado de las perspectivas a largo plazo de la fuerza electoral de la izquierda, se necesitarían datos que mostraran el porcentaje de electores que votaron consecuentemente en las cuatro elecciones. Por supuesto, el prerrequisito del comportamiento electoral consecuente es la presentación de la misma opción partidaria en todas las elecciones. Dada la débil consolidación organizativa de la izquierda y la formación y reformación de coaliciones entre partidos izquierdistas de nueva creación, la posibilidad de tal comportamiento electoral consecuente se ha visto reducida, colocando a la izquierda en desventaja a largo plazo frente a los partidos más viejos del centro y la derecha. Además, la actual situación política del Perú es tan fluida que cabe preguntarse si llegará a haber un largo plazo electoral. La última parte de este artículo especulará brevemente sobre este punto.

30 Los intentos de valorar el efecto de la no participación de la AP se ven complicados por la inscripción de analfabetos para las elecciones de 1980. Las cifras de la votación total no revelan si una parte del aumento de 3.5 a 4.1 millones de votos se debió a la participación en 1980 de partidarios de la AP que se habían abstenido en 1978 o a la participación de nuevos electores.

<i>Electorado inscrito</i>	<i>Votantes reales</i>	<i>% que votó</i>	<i>Votantes inscritos (principios de 1980)</i>	
1978 5.0m	3.5m	84%	alfabetizados	5.5m
1980 6.5m	4.1m	82%	analfabetos	0.8m

FUENTE: DESCO, Resumen Semanal, n. 50, diciembre de 1970 y n. 77, junio-julio de 1980, citados en Woy-Hazleton (1980).

REFLEXIONES SOBRE LA ALTERNATIVA BUROCRÁTICO-AUTORITARIA

Dado el legado del régimen velasquista de un nivel acrecentado de movilización popular, la crisis económica y la resultante imposición de un estricto programa de austeridad, las expectativas derivadas de un análisis comparativo del comportamiento político de los militares en América Latina señalarían hacia un intento de instalar un régimen burocrático-autoritario o excluyente. De hecho, los años 1975-80 mostraron ciertas tendencias en esa dirección. Las vicisitudes económicas impuestas a la población y algunos de los métodos empleados para poner en vigor las políticas económicas ciertamente se asemejaban a las de los regímenes burocrático-autoritarios, aunque la represión permaneció en un nivel mucho más bajo. En efecto, Cotler sostuvo a principios de 1978 que la contradicción entre las políticas de estabilización monetaria y las demandas de las fuerzas populares organizadas estaba inclinando la balanza en favor del establecimiento de una nueva dictadura militar más represiva (1979, pp. 280-81).

¿Por qué no actuaron los militares peruanos de conformidad con esta expectativa? La conceptualización de O'Donnell de la alianza entre los tecnócratas militares y civiles por una parte y los sectores internacionalizados de la burguesía y el capital nacional por la otra como la espina dorsal de un régimen burocrático-autoritario ofrece la respuesta más obvia (1973, 1978). En el Perú no se ha formado tal alianza porque las políticas nacionalistas, redistributivas e intervencionistas del gobierno militar entre 1968 y 1975 habían hecho tirantes las relaciones entre los militares y el capital extranjero, y entre los militares y los

sectores internacionalizados y nacionales de la burguesía. La imposición de las políticas de estabilización monetarista después de 1975 enajenó más aún a todos menos unos cuantos de los sectores de la burguesía orientados a la exportación. Las conceptualizaciones de Stepan (1978, pp. 73-113) y Collier (1979, pp. 385-93) ofrecen otras posibles explicaciones.³¹ A pesar del rápido aumento de la movilización popular y de la dramática reducción de los niveles de consumo popular, el grado de polarización política no había alcanzado las proporciones extremas que alcanzó en Chile antes del golpe militar de 1973. El hecho mismo de que los militares ejercían el poder gubernamental dio lugar a una lucha multipartidaria. La constelación política que con mucha probabilidad produciría un intento de instalar un régimen burocrático-autoritario es una constelación en la que la burguesía, una gran mayoría de la clase media, grandes sectores de la pequeña burguesía y los militares están todos ellos unidos en su oposición a las fuerzas populares organizadas y a un gobierno al que se ve como protector consciente de los intereses populares o como demasiado débil para resistir las demandas y las presiones populares.³² En contraste, los militares peruanos eran el gobierno y se hallaban ellos mismos bajo el ataque de todos los sectores. No sólo sus políticas reformistas le habían malquistado a la burguesía, sino que las políticas de austeridad inspiradas por el FMI después de 1975 también suscitaron una fuerte oposición entre la mayor parte de los sectores de la clase media, particularmente los empleados públicos que fueron afectados por despidos en gran escala y salarios reales drásticamente reducidos, así como en las fuerzas populares duramente golpeadas por el desempleo creciente y el desenfrenado aumento del costo de la vida.³³

Por otra parte, la reciente formación y la consiguiente poca consolidación del movimiento obrero y las organizaciones populares, combinadas con su fraccionamiento político, las hacía aparecer como menos amenazantes para la recuperación económica y la estabilidad política a los ojos de la clase media, la burguesía y la élite tecnocrática.

31 Stepan sugiere las siguientes variables claves como determinantes de la probabilidad de instauración y consolidación inicial de un régimen burocrático-autoritario: fuerza organizativa y unidad ideológica de la élite estatal, desarrollo de partidos políticos y grupos de intereses autónomos, grado de polarización y proporción de recursos/ demanda efectiva. Collier sugiere la disponibilidad de recursos económicos diversificados o especiales, gravedad de la brecha demanda-ejecutoria, fuerza política del sector popular y severidad de la amenaza percibida por los tecnócratas, el capital privado y la clase media.

32 Tal coalición golpista estaba presente en el Brasil en 1964 (véase, por ejemplo, Stepan 1971), en la Argentina en 1966 y 1976 (véase, por ejemplo, O'Donnell 1973 y 1978) y en Chile en 1973 (véase, por ejemplo, Valenzuela 1978).

33 Véase Dietz para el impacto de las políticas de estabilización del FMI en la calidad de la vida para las fuerzas populares.

También es de suponer que los militares, la burguesía y la clase media creyeran que el APRA podría revigorizar su movimiento popular y contener su militancia. El fracaso del APRA en este sentido y la sorprendente fuerza electoral de la izquierda bien pueden haber sido percibidos como una amenaza, pero sólo después de que la transición al régimen civil había empezado.

Por último, el gobierno militar peruano y la institución militar carecían de la unidad organizativa e ideológica necesaria para la instauración de un régimen burocrático-autoritario. La desunión interna entre los militares había sido rampante bajo Velasco, y aunque sus principales figuras fueron purgadas bajo Morales Bermúdez, los restantes miembros del gobierno militar seguían divididos y renuentes a recurrir a la represión en gran escala. Tampoco puede suponerse que las purgas hayan restaurado la unidad entre los militares como institución porque las lealtades personales de la oficialidad intermedia a los oficiales "progresistas" de alto rango se habían forjado durante un periodo de cuando menos seis años. Los precedentes sentados por las severas tensiones en los gobiernos y las instituciones militares del Brasil y la Argentina bien pueden haberle enseñado al gobierno militar peruano a precaverse contra el intento de emprender un proyecto político similar.

Ello no obstante, la posibilidad de una renovada intervención militar y de un viraje a un régimen excluyente más fuerte no puede descartarse. La pregunta clave es si el gobierno civil será capaz de lograr la recuperación económica y asegurar cierto grado de estabilidad social y política. La continua inflación desbocada, el estancamiento y el desempleo podrían agravar la polarización social y la amenaza planteada por las fuerzas populares contra los intereses del capital privado, los tecnócratas y la clase media a tal punto que estas fuerzas decidan volver a llamar a los militares e instaurar un régimen más represivo. Tal evolución social también podría tener por resultado un desplazamiento del equilibrio de poder entre los militares en favor de las fuerzas conservadoras. Por otra parte, las experiencias vividas durante la Revolución Peruana han destruido ciertamente la confianza de los militares en su superior capacidad de dirección política e ingeniería social y reducido en consecuencia su propensión a asumir la responsabilidad gubernamental.

En 1968 los militares peruanos consideraban a los políticos civiles incapaces de garantizar un orden social y político estable. Los militares, pues, tomaron el poder en la creencia de que podían ofrecer una mejor dirección en la búsqueda de la integración

nacional y el desarrollo económico. El objetivo perseguido por la principal corriente política dentro del gobierno militar era la reestructuración de la sociedad y la construcción de un sistema orgánico de participación ciudadana que pudiera ser orientado desde arriba. Dentro de este nuevo sistema, todos los grupos en la sociedad habían de colaborar armoniosamente en el avance del desarrollo económico y social nacional bajo la dirección del Estado. Como se ha explicado, el resultado de la búsqueda de reformas estructurales por los militares no correspondió a lo que se esperaba debido a una combinación de desunión interna, efectos contraproducentes de sus políticas de incentivos y esfuerzos organizativos contrarios por otros actores sociales. Mientras que la tendencia política principal actuaba en favor de la conciliación de clases y la movilización popular bajo la tutela del Estado, la presencia de la facción izquierdista en el gobierno representaba un punto de convergencia y un resguardo para las fuerzas radicales dentro de la burocracia estatal que promovían una auténtica movilización popular. Las políticas de incentivos del gobierno, particularmente la creación de la Comunidad Industrial, causó más conflicto que colaboración de clases, lo que a su vez facilitó los esfuerzos de los organizadores adversarios (particularmente las organizaciones obreras preexistentes) por promover la movilización autónoma en lugar de la integración en organizaciones patrocinadas por el Estado. La resistencia de la burguesía local y del capital extranjero tanto contra los componentes re-distributivos (como las CI) cuanto contra los componentes nacionalistas de las reformas gubernamentales (como la nacionalización de las empresas de propiedad extranjera y la rectoría del Estado en la economía) ayudaron a agudizar el conflicto de clases, pero al mismo tiempo impidieron el surgimiento de una alianza burocrático-autoritaria. Así, después de casi doce años en el poder, el gobierno militar peruano restauró la democracia parlamentaria liberal, el mismo sistema de gobierno que había remplazado en 1968. El resultado de la Revolución Peruana no fue, pues, un cambio en el sistema político de acuerdo con un plan, sino un cambio en el equilibrio de fuerzas políticas en favor del movimiento obrero y de la izquierda derivado de una compleja interacción entre la política estatal y la lucha de las fuerzas sociales para proteger y promover sus intereses.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberto, Giorgio; Santistevan, Jorge; y Pésara, Luis, *Estado y clase: la comunidad industrial en el Perú*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1977.
- Amat y León, Carlos, *La desigualdad interior en el Perú*, Lima, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1981. Angell, Alan, "Peruvian Labour and the Military Government since 1968", Working Paper, Universidad de Londres, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 1979.
- Béjar, Héctor, *La revolución en la trampa*, Lima, Ediciones Socialismo y Participación, 1976.
- Bollinger, William, "Peru Today-The Roots of Labour Militancy", *NACLA Report on the Americas* 14, 6 (nov.- dic.) 2-35, 1980. Chaplin, David, ed., *Peruvian Nationalism: A Corporate Revolution*, New Brunswick, N. Y., Transaction, 1976.
- Cleaves, Peter y Scurrah, Martin, *Agriculture, Bureaucracy and Military Rule in Peru*, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1980. Collier, David, ed., *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1979.
- Cotler, Julio, "The New Mode of Political Domination in Peru", en *The Peruvian Experiment*, compilado por Abraham F. Lowenthal, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1975.
- "State and Regimen: Comparative Notes on the Southern Cone and the 'Enclave' Societies", en *The New Authoritarianism in Latin America*, compilado por David Collier, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1979.
- Council on Hemispheric Affairs, *Washington Report on the Hemisphere*, Washington, D. C.
- Dancourt, Oscar y Pésara, Luis, "La política y la economía del señor Ulloa", *La Revista* 3 (nov.): 1-6, Lima, 1980.
- DESCO, Resumen Semanal, Lima, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- Dietz, Henry, "The IMF from the Bottom Up: Social Impacts of Stabilization Policies in Lima, Peru", Ponencia presentada en las reuniones conjuntas de la Latin American Studies Association y la Midwest Association of Latin American Studies en Bloomington, Indiana, 19-21 de octubre, 1980.
- Dore, Elizabeth y Weeks, John, "Class Alliances and Class Struggle in Peru", *Latin American Perspectives* 4 (3) : 4-17, 1977.

- Fitzgerald, E. V. K., *The State and Economic Development: Peru since 1968*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976. Gorman, Stephen M., "Peru before the Elections", *Government and Opposition* 13 (3) : 288-306, 1978.
- Handelman, Howard, "Peru: The March to Civilian Rule", *American Universities Field Staff Report: South America*, n. 2, 1980.
- Hobsbawm, E. J., "Peru: The Peculiar Revolution", *New York Re-view of Books*, 16 de diciembre, pp. 33-34, 1971.
- International Labour Office, *Yearbook of Labour Statistics*, Ginebra, 1980.
- Klarén, Peter, *Modernization, Dislocation, and Aprismo*, Austin, University of Texas Press, 1973.
- Korpi, Walter y Shalev, Michael, "Strikes, Power and Politics in the Western Nations, 1900-1976", en *Political Power and Social Theory*, compilado por Maurice Zeitlin, pp. 301-34, Greenwich, Connecticut, AI Press, 1980.
- Landsberger, Henry y McDaniel, Tim, "Hypermobilization in Chile, 1970-1973", *World Politics* 28 (4) : 502-41, 1976.
- Linz, Juan J., *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Break-down and Reequilibration*, volumen 1 de *The Breakdown of Democratic Regimes*, compilado por Juan J. Linz y Alfred C. Stepan, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978.
- Lowenthal, Abraham F., "Peru's Ambiguous Revolution", en *The Peruvian Experiment*, compilado por Abraham F. Lowenthal, pp. 3-43, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1975.
- "Dateline Peru: A Sagging Revolution", *Foreign Policy* 38 (primavera de 1980) : 182-90.
- Malloy, James M., ed., *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*, Pittsburgh, Penn., Pittsburgh University Press, 1977.
- McClintock, Cynthia, *Peasant Cooperatives and Political Change in Peru*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1981. "Velasco, Officers and Citizens: The Politics of Stealth", en *A Revolution Fails: The Peruvian Experiment Reconsidered*, compilado por Cynthia McClintock y Abraham F. Lowenthal, de próxima aparición.
- Mercado Jarrín, Edgardo, *Ensayos*, Lima, Imprenta del Ministerio de Guerra, 1974.
- Neira, Hugo, "Peru", en *Guide to the Political Parties of South America*, compilado por J. P. Bernard et al., pp. 393-468, Harmondsworth, Middlesex, Inglaterra, Penguin Books,

1973.

Nordlinger Eric A., *Soldiers in Politics: Military Coups and Governments*, Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1977.

North, Liisa, "The Peruvian Aprista Party and Haya de la Torre", *Journal of Inter-American Studies and World Affairs* 17, 2: 245-53, 1975.

O'Donnell, Guillermo A., *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism*, Berkeley, Institute of International Studies, University of California, 1973.

"Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic-Authoritarian State", *Latin American Research Review* 13, 1: 3-38.

Palmer, David Scott, "Revolution from Above: Military Government and Popular Participation in Peru, 1968-1972", Latin American Studies Program Dissertation Series núm. 47, Ithaca, N. Y., Cornell University, 1973.

Pease García, Henry, *El caso del poder oligárquico: lucha política en la escena oficial, 1968-1975*, Lima, DESCO, 1977.

Pike, Frederic, B. y Stritch, Thomas, eds., *The New Corporatism: Social-Political Structures in the Iberian World*, Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1974.

Roncagliolo, Rafael, *¿Quién ganó? Elecciones 1931-80*, Lima, DESCO, 1980.

Scurrah, Martin J. y Esteves, Guadalupe, "The Condition of Urban Labor", a ser incluido en *Post-revolutionary Politics in Peru*, compilado por Stephen M. Gorman, Boulder, Colorado, Crestview, de próxima aparición.

Shorter, Edward y Tilly Charles, *Strikes in France*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

Stallings, Barbara, "Peru and the U. S. Banks: Privatization of Financial Relations", en *Capitalism and the State in U. S.-Latin American Relations*, compilado por Richard F. Hagen, pp. 217-53, Palo Alto, California, Stanford University Press, 1979.

Stepan, Alfred C., *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1971.

The State and the Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1978.

Stephens, Clyne Huber, *The Politics of Worker's Participation: The Peruvian Approach in*

- Comparative Perspective*, Nueva York, Academic Press, 1980.
- Sulmont, Denis, *El movimiento obrero en el Perú, 1900-1956*, Lima, Tarea, 1975.
- Historia del movimiento obrero peruano, 1890-1977*, Lima, Tarea, 1977.
- Thorp, Rosemary y Bertram, Geoffrey, *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy*, Londres, MacMillan, 1978.
- Valenzuela, Arturo, *Chile*, en *The Breakdown of Democratic Regimes*, compilado por Juan J. Linz y Alfred C. Stepan, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins University Press, 1978.
- Woy-Hazleton, Sandra L., "The Return to Partisan Politics in Peru", Ponencia leída en las Reuniones de la Latin American Studies Association en Bloomington, Indiana, octubre de 1980.
- [Tomado de *Latin American Research Review*, vol. 17, n. 2, 1983. Traducción de José Luis González.]